

Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Guillermo Tomás Morera Hierro, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Ximena Cádiz Zamora, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado de los sentenciados, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

Finalmente, conforme lo informado por el señor Relator, encontrándose los autos en estado de ser vistos, con fecha quince de febrero de dos mil veinticuatro se produjo la muerte del sentenciado Riquelme Villalobos.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área



Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo, Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que Ximena Cádiz Zamora, producto de la situación imperante en el país después del 11 de septiembre de 1973, fue ordenada detener por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI) a causa de su sola militancia política en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, por agentes del Estado de Chile de la época, en diversas oportunidades. En una de estas ocasiones, fue detenida en el mes de enero de 1974 en Viña del Mar desde su domicilio, junto con su hermana y son conducidas al Cuartel Silva Palma, lugar en que un grupo de interrogadores, organizados y coordinados por los mandos militares procedieron a interrogarla acerca de sus compañeros del Partido y sobre la ubicación de su hermano, encontrándose vendada, la mantuvieron encerrada sin orden judicial legítima que



lo justificare, la torturaron mediante golpes, le obligaron a desnudarse y recibió tocamientos de índole sexual, le aplicación corriente en su cuerpo, y le forzaron a ver a su hermana colgada y desnuda, siendo liberada alrededor de cinco días después. En la última ocasión, fue detenida el 24 de marzo de 1974, desde el domicilio de otras personas, siendo privada de libertad en forma ilegítima en el Cuartel Silva Palma de Valparaíso, siendo liberada bajo fianza el 4 de diciembre de 1974, esto último en el marco del Consejo de Guerra Rol A-344 de Valparaíso, seguidos en contra de 21 personas por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, proceso que fue iniciado el 22 de mayo de 1974. La víctima, según se dijo, permaneció recluida en el Cuartel Silva Palma, sufriendo en forma reiterada apremios ilegítimos y torturas, especialmente por parte de los interrogadores pertenecientes al SICAJSI de la Armada, con el objeto de que en los interrogatorios entregase nombres de personas integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Consta que a la detenida sólo se le tomó declaración judicial con fecha 30 de mayo de 1974. Finalmente, doña Ximena Cádiz Zamora fue condenada a penas de extrañamiento, siendo expulsada a Francia.”;

2°) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Ximena Cádiz Zamora, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1° y 3° del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3°) Que por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en las causales de los numerales 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.



Respecto del capítulo de invalidación del numerando séptimo, la recurrente cuestiona la forma de construir las presunciones de culpabilidad, las que fueron realizadas en contravención a lo que establece el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal pues ellas se basan en antecedentes que no acreditan su culpabilidad y, además, ellos fueron obtenidos por medio de una medida para mejor resolver realizada por el tribunal, lo cual afecta el principio de objetividad, el principio de inocencia y la bilateralidad de la audiencia que debe regir en toda investigación criminal, todo lo cual se vio mermado en este caso ya que la actuación oficiosa del juzgador no le entregó ninguna posibilidad a los sentenciados de controvertir dicha información aportada.

Considera que no existió un proceso legalmente tramitado respecto de los enjuiciados, asegurando que debe regir el principio *in dubio pro reo* y cuando el tribunal decide ejecutar una medida como la descrita, le resta de eficacia a lo dispuesto en el artículo 109 del código adjetivo, en cuanto ordena *investigar, con igual celo, no solo los hechos y circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los inculpados, sino también los que les eximan de ella o la extingan o atenúen*.

En tal sentido, cuestiona la valoración probatoria realizada por el Tribunal, lo que vulneró los artículos 459, 464, y 488 del Código de Procedimiento Penal, asegurando que no existe sustento probatorio para acreditar la participación de ninguno de los investigados e incluso, ni siquiera existe soporte sobre algunos importantes aspectos propios de la investigación.

Enseguida, sobre la causal de casación del numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, sostiene que debió tenerse a la vista la



Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos”*. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada, pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;

4°) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo



ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al Tribunal de Casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado, cuenta con los defectos ya descritos pues, en sus



fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende analizar ya que, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada (artículo 546 N° 1 del estatuto procesal penal vigente a la época), lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Por otro lado, el libelo impugnatorio esgrime causales de casación que son incompatibles, existiendo un consenso asociado a la disconformidad y contradicción vinculada a las causales de casación de los numerales 1° y 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, pues los argumentos que pueden conformar uno u otro resultan incompatibles entre sí, por ello antinómicos, es decir, son contrarios a la lógica y la epistemología, ya que, por un lado, quien propone la primera de las causales de casación en el fondo que menciona el artículo 546 del código adjetivo, per se, debe aceptar los hechos que la sentencia tiene por acreditados y lo que cuestiona, en realidad, es la imposición de la pena en relación al delito, cometiendo un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya sea al calificar los



hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, al proponer un motivo de nulidad como el que describe el numeral séptimo de la mentada disposición, precisamente controvierte la observancia de las leyes reguladoras de la prueba en la construcción de dichos hechos, de tal manera que, como puede advertirse, los motivos no son armónicos sino, más bien, contrapuestos o antagónicos.

Sumado a lo anterior, lo cierto es que respecto al capítulo de nulidad establecido en el numerando 7°, el recurrente cuestiona el ejercicio de una facultad judicial como es la dictación de una medida para mejor resolver, lo cual fue ejercido dentro del marco de la legalidad e incorporó piezas de un proceso criminal seguido, igualmente, en contra de los enjuiciados, de tal manera que no se observa ninguna clase de ilegalidad en dicho accionar y, en realidad, lo que la recurrente cuestiona no es otra cosa que la valoración ejecutada por los jurisdicentes a dichos medios probatorios, señalando que ella vulnera las leyes reguladoras de la prueba y no permitiría alcanzar a la conclusión condenatoria arribada. Sin embargo, más allá de esta afirmación, tan general como imprecisa, ella no alcanza para conformar el vicio de casación que se plantea, pues en ninguna parte de su arbitrio se desarrolla de manera adecuada la forma en que se afectaron dichas normas de valoración. Es más, el articulista tan sólo asevera la infracción y la vincula con principios procesales que, de ninguna forma se advierten vulnerados, de allí que, en realidad, el apoderado defensor busca que esta Corte efectúe un ejercicio de revaloración probatoria que está vedado para esta sede, sobre todo si se constata que ellos – el acervo justificante – fueron



debidamente justipreciados por los sentenciadores de instancia.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo *“conforme a la ley y el mérito de autos”*, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este Tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;

6°) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7°) Que, en efecto, por parte de la defensa de los enjuiciados, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad de los encartados, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, a la lectura del fallo de primer grado, se observa que tan sólo el considerando trigésimo quinto, se refiere, de manera formal y genérica, a dicha alegación pues indica que dicha Convención es *“improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en*



cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad (sic)";

8º) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que tan sólo menciona razones formales para descartar su aplicación, a saber, una injustificada improcedencia y el carácter de lesa humanidad del ilícito de autos, las cuales resultan insuficientes ya que, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2º artículo 5º de la Constitución Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4º del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9º) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma,



cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Guillermo Tomás Morera Hierro, deducido en contra de la sentencia de fecha quince de enero de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, habiendo tomado conocimiento esta Corte del fallecimiento del condenado, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, el tribunal de primer grado, una vez realizadas las certificaciones correspondientes, dictará la resolución que en derecho corresponde.

III. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en



el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).



En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.

2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13,



bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.

Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la



penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oír esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3º) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4º) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal



manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III.- Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar



las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”* (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y disidencia por parte de sus autores.

Rol N° 8.705-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:41:54

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:41:54

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:41:55

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:51:32



PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:41:55



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando trigésimo quinto, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur y, 75 años respecto de Morera Hierro.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata



del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión*



del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4°) Que, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser*



humano.”. Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra*



parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.”

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: “Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá



*carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:*

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento



de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile



(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes



Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno “*con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta*”. En tanto, en lo que respecta al sentenciado Morera Hierro, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 75 años que, “actualmente, presenta una hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía hipertrófica/coronaria, aneurisma aórtico torácico, TEVAR toraco abdominal, endoprótesis aórtica abdominal endovascular, insuficiencia mitral leve, insuficiencia aórtica moderada, enfermedad coronaria 2 vasos y cuya evaluación EMPAM, el resultado es de *autovalencia con riesgo*”.

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), “*un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.*” (Ibidem, p.154).



En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener*



sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución, ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.” (Ibidem, p.167 y 168).

11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, por las argumentaciones dadas en las motivaciones precedentes, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, postura que ya ha venido



esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte Suprema N° 3743-2024, 9256-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 59.850-2024, 60.327.2024 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 144.120-2013 DDV, **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Guillermo Tomás Morera Hierro, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantiene la decisión del tribunal de alzada, en orden a aprobar las resoluciones consultadas de fechas diez de marzo de dos mil veintiuno y siete de septiembre de dos mil veintidós, escritas a fojas 1321 y 1453.

III. Que, en lo demás, se confirma el fallo apelado.



Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°8.705-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:41:57

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:41:58

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:41:58

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:51:33



PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:41:59



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Mario Arancibia Chow, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada con fecha cinco de febrero de dos mil veinticuatro.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado de los sentenciados, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

Finalmente, conforme lo informa el señor Relator, encontrándose los autos en estado de ser vistos, con fecha quince de febrero de dos mil veinticuatro se produjo la muerte del sentenciado Riquelme Villalobos.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:



“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo, Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que Mario Arancibia Chow fue ordenado detener por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), en una fecha no precisada entre fines de octubre o principio de noviembre de 1973, atendido que fue miembro de la Federación de Estudiantes Revolucionarios, detención que se concretó en el domicilio de unos amigos, ubicado en Pasaje 15, Playa Ancha, Valparaíso, siendo trasladado al recinto de detención emplazado en la Academia de Guerra Naval, lugar en que se encontraba dispuesto un grupo especializado de interrogadores Infantes de Marina, también organizados y coordinados por los mandos militares, con el



objeto que entregare antecedentes acerca de sus actividades políticas y de una supuesta localización de armas, quienes procedieron a encapucharlo, mantenerlo encerrado sin orden judicial legítima que lo justificare, interrogarlo y torturarlo mediante diversas técnicas, entre ellas, aplicación de corriente y golpes de pie y puño en diferentes partes del cuerpo, siendo liberado luego de seis días aproximadamente.”;

2º) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Mario Arancibia Chow, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1º y 3º del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3º) Que, por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en la causal del numeral 1º del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostiene que, por la edad de sus mandantes, debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos*. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda,



agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumenta que los sentenciadores de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ello en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación y, por lo demás, acusa una limitación injustificada de varios derechos humanos que los favorecen y que también están reconocidos en tratados internacionales, lo cual se traduce en una serie de vicios de aplicación errónea de la ley, a saber, los artículos 24, 22, 11 y 10 del Decreto 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 5° inciso segundo, 6°, 7° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República y, nuevamente, la afectación de los artículos 3°, 6° en su literal N), 13° inciso final y 22° de la Convención Interamericana Sobre La Protección de Los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;

4°) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por



remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley



que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado cuenta con defectos como los descritos pues, en sus fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado, lo cual se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo *“conforme a la ley y el mérito de autos”*, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este Tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;



6º) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7º) Que, en efecto, por parte de la defensa de los enjuiciados, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad de los encartados, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, a la lectura del fallo de primer grado, se observa que tan sólo el considerando vigésimo octavo, se refiere, de manera formal y genérica, a dicha alegación pues indica que dicha Convención es *“improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad (sic)”*;

8º) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que tan sólo menciona razones formales para descartar su aplicación, a saber, una injustificada improcedencia y el carácter de lesa humanidad del ilícito de autos, las cuales resultan insuficientes ya que, la Convención Interamericana sobre la Protección de



los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9°) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:



I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, deducido en contra de la sentencia de fecha cinco de febrero de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, habiendo tomado conocimiento esta Corte del fallecimiento del condenado, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, el tribunal de primer grado, una vez realizadas las certificaciones correspondientes, dictará la resolución que en derecho corresponde.

III. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una



motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de



quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.

2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas



alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.

Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oír esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el



principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3°) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4°) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra



la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III.- Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”* (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y



disidencia por parte de sus autores.

Rol N° 9.256-2024.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:14

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:14

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:15

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:32

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:16



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando vigesimoctavo, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur y, 87 años respecto de Santibáñez Obreque.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata



del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión*



del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4°) Que, de igual forma, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser*



humano.”. Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra*



parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares)."

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: *"Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte"). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá*



*carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:*

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento



de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile



(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes



Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno *“con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta”.* En tanto, en lo que respecta al sentenciado Santibáñez Obreque, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 86 años que, actualmente, cuenta con *“antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal”.*

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).

En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo



que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. *Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución,*



ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.” (Ibidem, p.167 y 168).

11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, por las argumentaciones dadas en las motivaciones precedentes, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, postura que ya ha venido esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte



Suprema N° 8705-2024, 3743-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 59.850-24 60.327.2024 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, por el Ministro en Visita extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 406-2019 DDV, **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantiene la decisión del tribunal de alzada, en orden a aprobar la resolución consultada de fecha uno de septiembre de dos mil veintidós, escrita a fojas 314.

III. Que, en lo demás, se confirma el fallo apelado.

Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.



Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°9.256-2024.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:17

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:17

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:18

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:34

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:18



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha siete de marzo de dos mil veinticuatro, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur, como autor del delito de secuestro con grave daño en la persona de Dagoberto Eliezer Espinoza Vergara, aplicándole una pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada, con declaración que, al referido sentenciado, se le impone la carga procesal del pago de las costas de la causa.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado del sentenciado, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes



pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo, Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que Dagoberto Eliezer Espinoza Vergara fue ordenado detener por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI) debido a su militancia en el Partido Comunista. La detención se concretó en octubre de 1974, en su lugar de trabajo, ubicado en un edificio cercano a la plaza Aníbal Pinto, en Valparaíso, alrededor de las 11:00 horas, siendo conducido por funcionarios militares al Cuartel Silva Palma, lugar en que un grupo de interrogadores organizados y coordinados, también por los mandos militares, pertenecientes a la Infantería de Marina, con el objeto que entregare antecedentes acerca de los compañeros del partido y de sus actividades, lo encapucharon, lo mantuvieron encerrado sin orden judicial legítima que lo justificare, lo interrogaron, lo carearon con otro detenido, lo golpearon y amenazaron, siendo liberado después de cinco días.”;

2º) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la



existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Dagoberto Eliezer Espinoza Vergara, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1° y 3° del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3°) Que, por parte de la defensa del sentenciado, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en la causal del numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostiene que, por la edad de sus mandantes, debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos*. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;



4º) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1º de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se



plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado cuenta con defectos como los descritos pues, en sus fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado, lo cual se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición



concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo *“conforme a la ley y el mérito de autos”*, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este Tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;

6º) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7º) Que, en efecto, por parte de la defensa del enjuiciado, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad del encartado, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, a la lectura del fallo de primer grado, se observa que tan sólo el considerando vigésimo octavo, se refiere, de manera formal y genérica, a dicha alegación pues indica que dicha Convención es *“improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad (sic)”*;

8º) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por



el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que tan sólo menciona razones formales para descartar su aplicación, a saber, una injustificada improcedencia y el carácter de lesa humanidad del ilícito de autos, las cuales resultan insuficientes ya que, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9°) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda



instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado del sentenciado Juan de Dios Reyes Basaur, deducido en contra de la sentencia de fecha veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la



Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja,



precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.

2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas,



entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.

Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oír esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya



facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3º) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4º) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir



con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III.- Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”* (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y disidencia por parte de sus autores.



Rol N° 20.636-2024.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:20

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:20

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:21

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:35

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:22



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando vigesimoséptimo, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio del condenado, justificando ello en la avanzada edad del sentenciado, 92 años en su caso.

2º) Que, en esta materia, por la edad del referido inculcado y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, él integra el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la



Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel*



Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4º) Que, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano."* Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos



Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: *“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”*

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos*



de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares).”

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: *“Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia*



y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo internacional en la materia, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.



8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile (A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en*



general”, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno “con



dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardiaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad. De igual forma, precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta”.

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y su estado de salud, esto último remarcado por el plano penitenciario en que cumplirá su condena, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).

En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad.* En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana*



implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad” (Mínguez Rosique, Marina. *Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispanica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución, ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.”* (Ibidem, p.167 y 168).



11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentra el enjuiciado, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, por las argumentaciones dadas en las motivaciones precedentes, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, postura que ya ha venido esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte Suprema N° 8.705-2024, 9.256-2024, 3.743-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 59.850-24 60.327.2024 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,



I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha siete de marzo de dos mil veinticuatro, por el Ministro en Visita extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 450-2019, **CON DECLARACIÓN** que, al sentenciado Juan de Dios Reyes Basaur, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantiene la decisión del tribunal de alzada, en orden a aprobar las resoluciones consultadas de fechas veintiuno de octubre de dos mil veintidós y cinco de marzo de dos mil veinticuatro, escritas a fojas 390 y 591, respectivamente, que decretaron los sobreseimientos parciales y definitivos en relación a los acusados, Ricardo Riesco Cornejo y Valentín Riquelme Villalobos.

III. Que, en lo demás, se confirma el fallo apelado.

Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.



Rol N°20.636-2024.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:23

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:23

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:24

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:37

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:24



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, la entonces Ministra en Visita Extraordinaria, señora María Cruz Fierro Reyes, con fecha treinta de diciembre de dos mil veintitrés, dicta sentencia definitiva en la cual, en lo pertinente, condena a Juan de Dios Reyes Basaur, como autor del delito de secuestro con grave daño en la persona de Viviana Victoria Fernández Montenegro, aplicándole una pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales y costas de la causa.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada, revocando lo decidido sólo en cuanto a la condena en costas.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado del sentenciado, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que, en el mes de febrero del año 1974, producto de decisiones adoptadas por el Departamento de Análisis del Servicio de Inteligencia de la Comandancia del Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, S.I.C.A.J.S.I., de la



Armada de Chile, que funcionaba en la Academia de Guerra Naval de Valparaíso, en razón de las ideas políticas que profesaba, como asimismo su familia, Viviana Victoria Fernández Montenegro, a esa época de 14 años de edad, fue detenida en su domicilio del cerro Florida de Valparaíso y llevada al Cuartel Silva Palma, aledaño a la Academia de Guerra Naval, mismo lugar al que fueron conducidas su hermana Morelia del Rosario Fernández Montenegro y su madre Emma Mercedes Montenegro Mena, detenciones realizadas por efectivos de la Armada de Chile, sin orden de tribunal competente.

Que, en el referido recinto de detención, Viviana Victoria Fernández Montenegro, fue interrogada, al igual que sus parientes indicadas, acerca de sus actividades políticas y sobre la existencia de supuestas armas o depósitos de ellas que se encontrarían escondidas, fue abusada sexualmente, recibiendo además golpes, insultos, amenazas de muerte, aplicación de corriente en sus partes íntimas, tobillos y dedos de las manos.

Que, luego de una semana aproximadamente, fue dejada en libertad, pero firmando semanalmente y por un año en un Retén de Carabineros el cerro Alegre, sin que se incoara en su contra proceso judicial alguno, ni del fuero militar ni ordinario.

Que, resultó con daño emocional, familiar y psicosocial, con sentimiento de vulnerabilidad, amenaza y desorganización familiar y política que ha afectado sus procesos evolutivos identitarios, su sentimiento de pertenencia y visualización de la autoridad, presentando sufrimiento psíquico de relevancia, todo ello producto de las políticas de persecución y amedrentamiento efectuado por el organismo ya referido.”;



2º) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Viviana Victoria Fernández Montenegro, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1º y 3º del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3º) Que, por parte de la defensa del sentenciado, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en la causal del numeral 1º del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostiene que, por la edad de sus mandantes, debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos*. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1º del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3º letra N), 6º, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumenta que los sentenciadores



de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ello en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación y, por lo demás, acusa una limitación injustificada de varios derechos humanos que los favorecen y que también están reconocidos en tratados internacionales, lo cual se traduce en una serie de vicios de aplicación errónea de la ley, a saber, los artículos 24, 22, 11 y 10 del Decreto 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 5° inciso segundo, 6°, 7° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República y, nuevamente, la afectación de los artículos 3°, 6° en su literal N), 13° inciso final y 22° de la Convención Interamericana Sobre La Protección de Los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;

4°) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo



ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado cuenta con defectos como los descritos pues, en sus



fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado, lo cual se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo *“conforme a la ley y el mérito de autos”*, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;

6º) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de



razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7º) Que, en efecto, por parte de la defensa del enjuiciado, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad del encartado, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, en la lectura del fallo de primer grado, no se observa un razonamiento que se haga cargo de dicha alegación. En tanto, la Corte de Apelaciones, únicamente, alude a este aspecto cuando disiente del informe fiscal emitido;

8º) Que, en este orden de cosas, es claro que el sentenciador de instrucción, confirmado por el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que, es la Corte la única que algo menciona sobre dicho aspecto y tan sólo alude a ello cuando le corresponde emitir pronunciamiento sobre el informe emitido por la Fiscalía Judicial, órgano que declara la procedencia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, lo cual resulta insuficiente ya que el aludido instrumento internacional fue promulgado con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2º artículo 5º de la Constitución Política de la República, de tal manera que



dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9º) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado del sentenciado Juan de Dios Reyes Basaur, deducido en contra de la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte



de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.



En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1° de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.

2°) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3° bis del Decreto Ley N° 321); pero



existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.

Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados



de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oirá esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3°) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la



procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4º) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral,



como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III.- Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”* (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y disidencia por parte de sus autores.

Rol N° 30.919-2024.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.



MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:26

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:26

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:27

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:38

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:27



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio del condenado, justificando ello en la avanzada edad del sentenciado, 92 años en su caso.

2º) Que, en esta materia, por la edad del referido inculpado y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, él integra el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un



compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del*



aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publishing Chile. Año 2012).

4º) Que, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano."* Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la



Integridad Personal: *“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”*

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la*



ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares)."

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: *"Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte"). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente*



Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”



De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se



contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile (A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).



9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno *“con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento*



anticoagulante, insuficiencia cardiaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad. De igual forma, precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta”.

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y su estado de salud, esto último remarcado por el plano penitenciario en que cumplirá su condena, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).

En estas condiciones, la pena aplicada al encartado en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad.* En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la*



pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad” (Mínguez Rosique, Marina. *Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución, ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.”* (Ibidem, p.167 y 168).

11º) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no



sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentra el enjuiciado, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, de esta forma, esta Corte comparte el dictamen fiscal emitido, el cual propuso la revocación del fallo de primera instancia, proponiendo que la pena aplicada sea sustituida por la reclusión domiciliaria, postura que ya ha venido esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte Suprema N° 3743-2024, 8705-2024, 9256-2024, 20.636.-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 59.850-24 60.327.2024 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha treinta de diciembre de dos mil veintitrés, por la entonces Ministra en Visita extraordinaria, doña María Cruz Fierro Reyes, en la



causa Rol N° 144.137-2013-MCT-Derechos Humanos, **CON DECLARACIÓN** que, al sentenciado Juan de Dios Reyes Basaur, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantienen las decisiones del tribunal de alzada, contenidas en los puntos resolutivos 1°, 2° y 4° del fallo de alzada.

Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°30.919-2024.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.



MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:28

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:29

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:30

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:40

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:30



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha tres de octubre de dos mil veintitrés, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Juan Patricio Cleary Zambón, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el dos de julio de dos mil veinticuatro, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada, con declaración que se imponen las costas de la causa a los condenados.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado de los sentenciados, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

Finalmente, conforme lo informa el señor Relator, encontrándose los autos en estado de ser vistos, con fecha quince de febrero de dos mil veinticuatro se produjo la muerte del sentenciado Riquelme Villalobos.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:



“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo, Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que, Juan Patricio Cleary Zambón, profesor e inspector del Liceo Eduardo de la Barra, ubicado en Valparaíso, fue ordenado detener por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), debido a su militancia en el Partido Comunista, lo que se concretó el 25 de septiembre de 1973, en dicho establecimiento educacional, siendo conducido a la Academia de Guerra Naval, luego al Buque Lebu, el que se encontraba apostado en el molo de abrigo de Valparaíso, después de dos meses de encierro es llevado en la barcaza Policarpo Toro rumbo a Antofagasta, permaneciendo recluso en el centro de detención ubicado en las antiguas oficinas



salitreras de Chacabuco, donde estuvo hasta marzo de 1974. Enseguida es transportado por vía aérea hasta la Base Aeronaval El Belloto, siendo conducido al Cuartel Silva Palma, oportunidad en que un grupo de interrogadores, organizados y coordinados por los mandos militares, con el objeto que entregare antecedentes acerca de sus compañeros del Partido, encontrándose encapuchado y amarrado, lo mantuvieron encerrado sin orden judicial que lo justificare, lo interrogaron y torturaron mediante amenazas, siendo liberado finalmente después de unos días.”;

2º) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Juan Patricio Cleary Zambón, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1º y 3º del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3º) Que, por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en la causal del numeral 1º del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostiene que, por la edad de sus mandantes, debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad,*



de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumenta que los sentenciadores de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ello en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación y, por lo demás, acusa una limitación injustificada de varios derechos humanos que los favorecen y que también están reconocidos en tratados internacionales, lo cual se traduce en una serie de vicios de aplicación errónea de la ley, a saber, los artículos 24, 22, 11 y 10 del Decreto 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 5° inciso segundo, 6°, 7° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República y, nuevamente, la afectación de los artículos 3°, 6° en su literal N), 13° inciso final y 22° de la Convención Interamericana Sobre La Protección de Los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;

4°) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta



destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa



pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado cuenta con defectos como los descritos pues, en sus fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado, lo cual se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de



reemplazo “conforme a la ley y el mérito de autos”, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este Tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;

6°) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7°) Que, en efecto, por parte de la defensa de los enjuiciados, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad de los encartados, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, a la lectura del fallo de primer grado, se observa que tan sólo el considerando vigesimonoveno, se refiere, de manera formal y genérica, a dicha alegación pues indica que dicha Convención es “*improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad (sic)*”;

8°) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que tan sólo



menciona razones formales para descartar su aplicación, a saber, una injustificada improcedencia y el carácter de lesa humanidad del ilícito de autos, las cuales resultan insuficientes ya que, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9°) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a



derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, deducido en contra de la sentencia de fecha dos de julio de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, habiendo tomado conocimiento esta Corte del fallecimiento del condenado, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, el tribunal de primer grado, una vez realizadas las certificaciones correspondientes, dictará la resolución que en derecho corresponde.

III. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en



términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las



víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.

2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda,*



promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.

Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oirá esta



petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3º) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4º) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:



I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III.- Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”*



(<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y disidencia por parte de sus autores.

Rol N° 32.767-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:31

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:32

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:32

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:41

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:33



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando vigesimonoveno, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur y, 87 años respecto de Santibáñez Obreque.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata



del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión*



del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4°) Que, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser*



humano.”. Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra*



parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.”

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: *“Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá*



*carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:*

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento



de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile



(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes



Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno “*con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta*”. En tanto, en lo que respecta al sentenciado Santibáñez Obreque, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 86 años que, actualmente, cuenta con “*antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal*”.

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), “*un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.*” (Ibidem, p.154).

En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo



que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución,*



ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.” (Ibidem, p.167 y 168).

11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, por las argumentaciones dadas en las motivaciones precedentes, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, postura que ya ha venido esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte



Suprema N° 3.743-2024, 8.705-2024, 9.256-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 59.850-24 60.327.2024 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha tres de octubre de dos mil veintitrés, por el Ministro en Visita extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 5-2016 DDV, **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantiene la decisión del tribunal de alzada, en orden a aprobar la resolución consultada de fecha seis de junio de dos mil veinticuatro, escrita a fojas 835.

III. Que, en lo demás, se confirma el fallo apelado.

Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.



Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°32.767-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:34

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:35

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:35

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:43

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:36



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha treinta de marzo de dos mil veintitrés, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Iván Sergio Vuskovic Villanueva, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada y aprueba, además, el sobreseimiento parcial y definitivo del sentenciado Valentín Riquelme Villalobos, quien fuere condenado en primera instancia.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado de los sentenciados, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó



activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo, Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que el 23 de septiembre de 1973, Iván Vuskovic Villanueva fue ordenado detener por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), por su calidad de dirigente en las Juventudes Comunistas, lo que se concretó en la Plaza Victoria de Valparaíso, siendo conducido por funcionarios de Carabineros a la Academia de Guerra Naval, lugar en que un grupo de interrogadores organizados y coordinados, también por los mandos militares, con el objeto que entregare antecedentes, procedieron a mantenerlo encerrado sin orden judicial que lo justificare, interrogarlo, y torturarlo mediante diversas técnicas, entre ellas aplicación de corriente “el teléfono” –golpes en ambos oídos con las manos abiertas-, diversos golpes en su cuerpo, encontrándose encapuchado y vendado durante dichos interrogatorios. Posteriormente y encontrándose encerrado, en los mismos



términos descritos en el Buque Lebu y luego en el recinto de detención “Melinka”, fue conducido en tres oportunidades al Cuartel Silva Palma, lugar en que fue interrogado y torturado con similares técnicas a las recién indicadas por un grupo de interrogadores también organizados y coordinados por los mandos militares, siendo regresado a los recintos de detención.

Que, ni el mando militar del SICAJSI ni ninguno de los miembros que conformaban el grupo especial de interrogadores de ese organismo, adoptaron medida alguna para dar cuenta a la autoridad competente, tanto de la detención de Iván Vuskovic Villanueva como de algún supuesto hecho ilícito cometido por dicha persona. No se formó causa ni investigación naval en tal sentido.”;

2º) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Iván Sergio Vuskovic Villanueva, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1º y 3º del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3º) Que, por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en la causal del numeral 1º del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostiene que, por la edad de sus mandantes, debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según*



corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumenta que los sentenciadores de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ello en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación y, por lo demás, acusa una limitación injustificada de varios derechos humanos que los favorecen y que también están reconocidos en tratados internacionales, lo cual se traduce en una serie de vicios de aplicación errónea de la ley, a saber, los artículos 24, 22, 11 y 10 del Decreto 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 5° inciso segundo, 6°, 7° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República y, nuevamente, la afectación de los artículos 3°, 6° en su literal N), 13° inciso final y 22° de la Convención Interamericana Sobre La Protección de Los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;



4º) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1º de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se



plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado cuenta con defectos como los descritos pues, en sus fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado, lo cual se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición



concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo “*conforme a la ley y el mérito de autos*”, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este Tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;

6º) Que, no obstante, el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7º) Que, en efecto, por parte de la defensa de los enjuiciados, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad de los encartados, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, a la lectura del fallo de primer grado, se observa que tan sólo el considerando trigésimo, se refiere, de manera formal y genérica, a dicha alegación pues indica que dicha Convención es “*improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad (sic)*”;

8º) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por



el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que tan sólo menciona razones formales para descartar su aplicación, a saber, una injustificada improcedencia y el carácter de lesa humanidad del ilícito de autos, las cuales resultan insuficientes ya que, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9°) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda



instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, deducido en contra de la sentencia de fecha treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una



motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de



quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.

2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas



alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.

Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oír esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el



principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3°) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4°) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra



la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III. Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”* (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y



disidencia por parte de sus autores.

Rol N° 32.864-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:08

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:08

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:09

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:51:35

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:10



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando trigésimo, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur y, 87 años respecto de Santibáñez Obrequé.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata



del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión*



del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4°) Que, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser*



humano.”. Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra*



parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.”

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: “Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá



*carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:*

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento



de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile



(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes



Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno *“con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta”.* En tanto, en lo que respecta al sentenciado Santibáñez Obreque, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 86 años que, actualmente, cuenta con *“antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal”.*

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).

En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo



que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. *Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución,*



ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.” (Ibidem, p.167 y 168).

11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, por las argumentaciones dadas en las motivaciones precedentes, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, postura que ya ha venido esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte



Suprema N° 3743-2024, 8705-2024, 9256-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 59.850-24 60.327.2024 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha treinta de marzo de dos mil veintitrés, por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 5-2015 DDV, **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantiene la decisión del tribunal de alzada, en orden a aprobar las resoluciones consultadas de fechas cuatro de octubre de dos mil veintidós y de ocho de abril de dos mil veinticuatro, escritas a fojas 856 y 1004, respectivamente.

III. Que, en lo demás, se confirma el fallo apelado.



Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°32.864-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:11

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:12

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:12

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:51:36



PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:13



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de David Navia Burgos, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha de diecisiete de julio de dos mil veinticuatro, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada y, a su vez, aprueba el sobreseimiento parcial y definitivo respecto del sentenciado Riquelme Villalobos.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado de los sentenciados, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó



activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo, Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que los primeros días de abril de 1974, David Emilio Navia Burgos, fue ordenado detener por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), por su calidad de simpatizante del Movimiento Izquierdista Revolucionario, lo que se concretó en horas de la madrugada, en su domicilio ubicado en calle Manuel Rodríguez N° 198, Cerro Esperanza, Valparaíso, siendo conducido por funcionarios militares al Cuartel Silva Palma, encontrándose en ese lugar un grupo de interrogadores organizados y coordinados por los mandos militares, con el objeto que entregare antecedentes acerca de sus compañeros e imputándole ser parte de un denominado “Plan Z”, lugar en que procedieron a mantenerlo encerrado sin orden judicial que lo justificare, interrogarlo, y torturarlo mediante diversas técnicas, entre ellas, aplicación de corriente en diversas partes del



cuerpo, golpes de puños y pies, amenaza de dispararle en la cabeza, privación de alimentos, entre otros, encontrándose encapuchado durante dichos interrogatorios. Aproximadamente a principios de mayo de 1974 la víctima fue trasladada a un recinto de detención ubicado en Puchuncaví denominado “Melinka”. Finalmente la víctima fue recién puesta a disposición de la Fiscalía Naval con fecha 22 de mayo de 1974 y obteniendo su libertad provisional el 26 de septiembre de 1974.”;

2°) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de David Emilio Navia Burgos, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1° y 3° del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3°) Que, por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en la causal del numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostiene que, por la edad de sus mandantes, debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos*. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena



privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumenta que los sentenciadores de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ello en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación y, por lo demás, acusa una limitación injustificada de varios derechos humanos que los favorecen y que también están reconocidos en tratados internacionales, lo cual se traduce en una serie de vicios de aplicación errónea de la ley, a saber, los artículos 24, 22, 11 y 10 del Decreto 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 5° inciso segundo, 6°, 7° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República y, nuevamente, la afectación de los artículos 3°, 6° en su literal N), 13° inciso final y 22° de la Convención Interamericana Sobre La Protección de Los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;

4°) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el



cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una



palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5º) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado cuenta con defectos como los descritos pues, en sus fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado, lo cual se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo *“conforme a la ley y el mérito de autos”*, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este Tribunal de casación determinar



el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;

6º) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7º) Que, en efecto, por parte de la defensa de los enjuiciados, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad de los encartados, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, a la lectura del fallo de primer grado, se observa que tan sólo el considerando trigésimo segundo, se refiere, de manera formal y genérica, a dicha alegación pues indica que dicha Convención es *“improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad (sic)”*;

8º) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que tan sólo menciona razones formales para descartar su aplicación, a saber, una injustificada improcedencia y el carácter de lesa humanidad del ilícito de autos, las cuales



resultan insuficientes ya que, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9°) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de



Procedimiento Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obrequé, deducido en contra de la sentencia de fecha diecisiete de julio de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.



El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que



responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.

2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso



de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.

Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oirá esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes



para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3º) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4º) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe



atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III.- Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”* (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y disidencia por parte de sus autores.

Rol N° 38.025-2024



Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:40

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:41

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:41

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:44

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:42



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando trigésimo segundo, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur y, 87 años respecto de Santibáñez Obrequé.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata



del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión*



del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4°) Que, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser*



humano.”. Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra*



parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.”

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: *“Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá*



*carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:*

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento



de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile



(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes



Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno *“con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta”.* En tanto, en lo que respecta al sentenciado Santibáñez Obreque, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 86 años que, actualmente, cuenta con *“antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal”.*

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).

En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo



que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. *Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución,*



ocasiona un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.” (Ibidem, p.167 y 168).

11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

11°) Que, de esta forma, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, el cual propuso la confirmación, en todas sus partes, del fallo de primera instancia, únicamente incorporando, además, la condena en costas de los sentenciados.



Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, por el Ministro en Visita extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 215-2016 DDV (OVM), **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantiene la decisión del tribunal de alzada, en orden a aprobar las resoluciones consultadas de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós y seis de junio de dos mil veinticuatro, escritas a fojas 1612 y 1785, respectivamente.

III. Que, en lo demás, se confirma el fallo apelado.

Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.



Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°38.025-2024.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:43

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:43

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:44

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:45

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:44



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha cuatro de junio de dos mil veinticuatro, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Sergio Morris Barrios, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha de diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado de los sentenciados, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, conformada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente



por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que, en ese contexto, Sergio Morris Barrios fue ordenado detener por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), por su calidad de militante del Partido Comunista, lo que se concretó el día 17 de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo correspondiente a la Empresa Portuaria de Chile, siendo conducido al recinto de detención ubicado en el buque Lebu, lugar donde estuvo alrededor de cincuenta días, siendo en ese periodo llevado en aproximadamente tres oportunidades a otro recinto de detención emplazado en la Academia de Guerra Naval , en fechas indeterminadas entre el 17 de septiembre y noviembre de 1973 . En ese recinto, se encontraba dispuesto un grupo de interrogadores, también organizados y coordinados por los mandos militares, con el objeto que entregare antecedentes acerca de la ubicación de su hermano y de supuestas armas, quienes procedieron a encapucharlo y mantenerlo encerrado sin orden judicial legítima que lo justificare, interrogarlo y torturarlo mediante diversas técnicas, entre ellas, golpes en el pecho con un objeto contundente y patadas en sus órganos genitales, constando en autos que Morris Barrios no fue puesto a disposición de la autoridad naval de la época para la investigación de algún eventual ilícito”;



2º) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Sergio Morris Barrios, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1º y 3º del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3º) Que por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en las causales de los numerales 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.

Respecto del capítulo de invalidación del numerando primero, sostiene que debió tenerse a la vista la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos*. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1º del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3º letra N), 6º, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumenta que los sentenciadores



de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ello en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación.

Enseguida, sobre la causal de casación del numeral 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, acusa la recurrente que el fallo se basó indebidamente en la declaración de un único testigo, sin cumplir los requisitos establecidos para que esta tenga valor probatorio suficiente. Así, postula existió sólo un testigo cuya declaración no fue ratificada por ningún otro, por lo cual, insiste en que la sentencia se apoyó en presunciones que no cumplen con los criterios de multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia exigidos por la ley y por ello deduce que el fallo no aplicó correctamente las normas de la sana crítica, afectando la valoración de las pruebas presentadas.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;

4°) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo



ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado, cuenta con los defectos ya descritos pues, en sus



fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende analizar ya que, en primer término, presenta causales de casación que son incompatibles, existiendo un consenso asociado a la disconformidad y contradicción vinculada a las causales de casación de los numerales 1° y 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, pues los argumentos que pueden conformar uno u otro resultan incompatibles entre sí, por ello antinómicos, es decir, son contrarios a la lógica y la epistemología, ya que, por un lado, quien propone la primera de las causales de casación en el fondo que menciona el artículo 546 del código adjetivo, per se, debe aceptar los hechos que la sentencia tiene por acreditados y lo que cuestiona, en realidad, es la imposición de la pena en relación al delito, cometiendo un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya sea al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, al proponer un motivo de nulidad como el que describe el numeral séptimo de la mentada disposición, precisamente controvierte la observancia de las leyes reguladoras de la prueba en la construcción de dichos hechos, de tal manera que, como puede advertirse, los motivos no son armónicos sino, más bien, contrapuestos o antagónicos.

Sumado a lo anterior, lo cierto es que el primer capítulo de nulidad invocado, aquel establecido en el numerando 7°, el recurrente cuestiona el ejercicio de la facultad judicial de ponderación que es propio y privativo de los tribunales de instancia, lo cual, por lo demás, realiza de forma incorrecta, no entregando siquiera una explicación o descripción de aquello que considera un



vicio o yerro de casación, lo cual devela que, en realidad, el propósito del articulista es una nueva ponderación del acervo probatorio, lo que es una afirmación tan general como imprecisa, al punto que ella no alcanza para conformar el vicio de casación que se plantea, pues en ninguna parte de su arbitrio se desarrolla de manera adecuada la forma en que se afectaron dichas normas de valoración. Es más, el articulista tan sólo asevera la infracción y la vincula con principios procesales que, de ninguna forma se advierten vulnerados, de allí que, en realidad, el abogado defensor busca que esta Corte efectúe un ejercicio de revaloración probatoria que está vedado para esta sede, sobre todo si se constata que ellos – el acervo justificante – fueron debidamente justipreciados por los sentenciadores de instancia.

En este sentido, no está demás mencionar que los jueces de instancia son soberanos en torno a la fijación de los hechos y con ello, a la Corte Suprema, le está negada su revisión y se le obliga a aceptarlos, siempre y cuando no exista una vulneración palmaria y flagrante sobre alguna ley reguladora de la prueba que, como dispone el motivo de casación, influya substancialmente en lo dispositivo de la sentencia. En ese entendido, en su momento se sostuvo que *“a los jueces de la instancia les corresponde el establecimiento de los hechos y para este efecto disponen de la facultad privativa y soberana de valorar el mérito intrínseco de los diversos medios legales de prueba acumulados en la causa, sin que el ejercicio de esta facultad de ponderar y comparar discrecional y subjetivamente esos mismos elementos del proceso, esté sujeto a la censura del tribunal de casación, ni pueda caer dentro del ámbito en que opera la causal del N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, puesto que las leyes*



reguladoras de la prueba, cuya infracción da base al recurso de casación en el fondo, son sólo aquellas que establecen prohibiciones o limitaciones a la facultad antedicha, como lo sería la admisión en los fundamentos del fallo de antecedentes ajenos a los medios de prueba reconocidos como tales por el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal” (Rev. D. y J. T. LI, Segunda Parte, Sección Cuarta, Pág. 56, citado en la obra Tratado de Derecho Procesal Penal. T. II, Pág. 393 y 394, del autor Rafael Fontecilla Riquelme). En un mismo sentido se resolvió que, “la apreciación de las leyes reguladoras de la prueba a que alude el N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, implica la violación de una norma legal relativa a la prueba, pero no a la apreciación de los hechos, que la ley siempre radica, soberanamente, en los jueces de las instancias” (Rev. D. y J. T. LI, Segunda Parte, Sección Cuarta, Pág. 89, citado por el referido autor).

Como se puede apreciar, existe ya una interpretación asentada respecto a la invariabilidad de los hechos apuntados por los sentenciadores del grado, los que cuentan con la facultad de apreciar la prueba para determinar los mismos y ese ámbito escapa de la acción revisora de la Corte Suprema, salvo que los jueces violenten de forma grave las normas reguladoras de la prueba y ello tenga influencia en lo dispositivo del fallo – cuyo no es el caso de autos –, lo que debe ser descrito con claridad, siendo del todo insuficiente una enumeración de las normas legales que se denuncien violentadas o la descripción parcializada de ciertos elementos probatorios que, como se reitera, fueron debidamente tasados a propósito del análisis efectuado por los sentenciadores de fondo en el ejercicio de sus atribuciones propias, idea que predomina desde el Proyecto del Código de Procedimiento Penal para la República de Chile y que se devela en las palabras



de don Manuel Egidio Ballesteros, quien expresare: *“nosotros fijamos reglas generales para la manera de estimar la prueba, y consignamos los casos en que debe estimarse bastante para acreditar la existencia de un hecho, pero al mismo tiempo dejamos al juez la libertad de criterio para hacer sus inducciones o deducciones”*.

Con lo dicho, es posible concluir que el recurso pretende la ejecución de una tarea que ya fue efectuada en ambas instancias, entregándose razones legales para adoptar la decisión que ahora se cuestiona y, en concreto, se sustenta en un ejercicio privativo de los jueces, en los que no se observan los vicios que se les endilga a ellos.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo *“conforme a la ley y el mérito de autos”*, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este Tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;

6°) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7°) Que, en efecto, por parte de la defensa de los enjuiciados, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en



la modalidad de arresto domiciliario, aspecto que, en atención a los argumentos que se expondrán, era necesario analizar a la luz de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular por lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

8º) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por el tribunal de alzada, no dedica ninguna reflexión relacionada con el alcance de dicho instrumento internacional que se encuentra integrado al ordenamiento jurídico nacional, descartando cualquier medida alternativa o pena sustitutiva únicamente sobre la base del tramo penal aplicado, sin que ello sea suficiente pues los condenados son adultos mayores que padecen patologías de salud, encontrándose en una situación de vulnerabilidad que se contempla en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2º artículo 5º de la Constitución Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y requería de un razonamiento en ese aspecto, con lo cual el fallo se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4º del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9º) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del



Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, deducido en contra de la sentencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.



En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

A lo anterior, los discrepantes reafirman su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados



por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.

2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a*



programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.

Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución,



entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oírán esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3°) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4°) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, los disidentes estuvieron por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.



Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y disidencia por parte de sus autores.

Rol N° 46.354-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:49

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:49

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:50

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:46

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:50



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando decimoctavo, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de una sustitutiva respecto de sus mandantes, lo cual, en sede de casación, sustenta sobre la base de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores pues los sentenciados tienen, 92 años en el caso de Reyes Basaur y, 87 años respecto de Santibáñez Obreque.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que



entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3°) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel*



Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4º) Que, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano."* Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos



Humanos, señalando en su artículo 5.2, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: *“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”*

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5º) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos*



de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.”

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: *“Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia*



y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento



de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile



(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien deben considerarse en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como vemos, no es ajeno en el derecho internacional y como ya fuere indicado a propósito de la Opinión Consultiva OC-29/22 de la Corte Interamericana, son particularidades que deben ser ponderadas. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).



Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno *“con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta”.* En tanto, en lo que respecta al sentenciado Santibáñez Obreque, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 86 años que, actualmente, cuenta con *“antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal”.*

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto afflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – afflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).



En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener*



sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución, ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.” (Ibidem, p.167 y 168).

11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, por las argumentaciones dadas en las motivaciones precedentes, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, postura que ya ha venido



esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte Suprema N° 3.743-2024, 8.705-2024, 9.256-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 59.850-24 60.327.2024 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha cuatro de junio de dos mil veinticuatro, por el Ministro en Visita extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 37-2016, **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantiene la decisión del tribunal de alzada, en orden a aprobar el sobreseimiento definitivo y parcial de fechas trece de octubre de dos mil veintidós y dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, escritas a fojas 481, 781 y 782, respectivamente, las cuales fueren elevadas en consulta a dicha instancia.



III. Que, en lo demás, se confirma el fallo apelado.

Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°46.354-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:52

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:52

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:53

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:47



PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:53



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha veintidós de abril de dos mil veinticuatro, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Gloria Estela Andrade Garrido, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado de los sentenciados, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, pertenecientes



a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo, Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que, en circunstancias que Gloria Estela Andrade Garrido, de 17 años de edad, era alumna del Liceo N° 1 de Valparaíso, ubicado en Avenida Argentina N° 731 de esta ciudad, militante de las Juventudes Comunistas y participante activa del centro de alumnos de ese establecimiento durante el año 1973, aproximadamente el día 11 de octubre de 1973, a requerimiento de la directora del Liceo, Leonor Illesca, quien estaba en connivencia con los funcionarios de la Armada de Chile, fue citada a concurrir al Cuartel Silva Palma dependiente de esa repartición, sin orden de tribunal alguno y al margen de cualquier procedimiento, en donde fue interrogada por un grupo de Infantes de Marina especialmente organizados y coordinados por los mandos militares, preguntándole acerca de sus actividades políticas, siendo sometida a malos tratos, golpes de diversa consideración y amenazas , siendo liberada después de aproximadamente 12 días y resultando con las secuelas permanentes que da cuenta el Protocolo de Estambul que se ha acompañado a su respecto.”;



2º) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Gloria Estela Andrade Garrido, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1º y 3º del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3º) Que, por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en la causal del numeral 1º del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostiene que, por la edad de sus mandantes, debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos*. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1º del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3º letra N), 6º, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumenta que los sentenciadores de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte



Penal Internacional, ello en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación y, por lo demás, acusa una limitación injustificada de varios derechos humanos que los favorecen y que también están reconocidos en tratados internacionales, lo cual se traduce en una serie de vicios de aplicación errónea de la ley, a saber, los artículos 24, 22, 11 y 10 del Decreto 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 5° inciso segundo, 6°, 7° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República del Estado y, nuevamente, la afectación de los artículos 3°, 6° en su literal N), 13° inciso final y 22° de la Convención Interamericana Sobre La Protección de Los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;

4°) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o



resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado cuenta con defectos como los descritos pues, en sus fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que



pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado, lo cual se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo *“conforme a la ley y el mérito de autos”*, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este Tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;

6°) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;



7º) Que, en efecto, por parte de la defensa de los enjuiciados, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad de los encartados, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, a la lectura del fallo de primer grado, se observa que tan sólo el considerando trigésimo quinto, se refiere, de manera formal y genérica, a dicha alegación pues indica que dicha Convención es *“improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad (sic)”*;

8º) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que tan sólo menciona razones formales para descartar su aplicación, a saber, una injustificada improcedencia y el carácter de lesa humanidad del ilícito de autos, las cuales resultan insuficientes ya que, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2º artículo 5º de la Constitución Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa



humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9º) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, deducido en contra de la sentencia de fecha nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.



II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en



materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1° de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.

2°) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3° bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de



establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.

Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte



Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oirá esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3°) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para



casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4º) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la



conurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III.- Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”* (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y disidencia por parte de sus autores.

Rol N° 51.650-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.



MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:54

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:55

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:56

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:49

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:56



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando trigésimo quinto, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur y, 87 años respecto de Santibáñez Obrequé.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata



del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión*



del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4°) Que, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser*



humano.”. Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra*



parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.”

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: “Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá



*carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:*

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento



de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile



(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes



Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno *“con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta”.* En tanto, en lo que respecta al sentenciado Santibáñez Obreque, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 86 años que, actualmente, cuenta con *“antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal”.*

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).

En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo



que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución,*



ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.” (Ibidem, p.167 y 168).

11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, por las argumentaciones dadas en las motivaciones precedentes, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, postura que ya ha venido esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte



Suprema N° 3.743-2024, 8.705-2024, 9.256-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 59.850-24 60.327.2024 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha veintidós de abril de dos mil veinticuatro, por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 39-2015, **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantiene la decisión del tribunal de alzada, en orden a aprobar las resoluciones consultadas de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, tres de enero de dos mil veinticuatro y diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, escritas a fojas 504, 689 y 897, respectivamente.



III. Que, en lo demás, se confirma el fallo apelado.

Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°51.650-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:57

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 13:56:58

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 13:56:59

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:50



PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 13:56:59



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavolari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Humberto Aquiles Arancibia Celis, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha siete de octubre de dos mil veinticuatro, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado de los sentenciados, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, pertenecientes



a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo, Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que, Humberto Aquiles Arancibia Celis fue ordenado detener por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), por sus actividades y militancia en el Partido Socialista, su calidad de secretario del Área de Energía y Desarrollo, de dirigente de la Compañía de Gas de Valparaíso y su pertenencia al Grupo de Amigos del Presidente Allende. Fue detenido por personal de la Armada el día 3 de octubre de 1973, lo que se concretó en calle Roma N° 305, comuna de Villa Alemana, vía pública, siendo conducido a la Academia de Guerra Naval y al Cuartel Silva Palma, lugar en que un grupo de interrogadores organizados y coordinados, también por los mandos militares, pertenecientes a la Infantería de Marina, con el objeto que entregare antecedentes acerca de los compañeros del partido y la supuesta ubicación de explosivos y armas, procedieron a encerrarlo sin orden judicial que lo justificare, interrogarlo y torturarlo mediante diversas técnicas, entre ellas, golpes y aplicación de corriente eléctrica en su cuerpo, particularmente en



los dedos de las manos y en los tobillos, además de darle golpes en los oídos, lo que se conocía como la técnica del “teléfono”. Luego fue trasladado al buque Lebu, siendo llevado nuevamente, en una fecha no precisada de diciembre de 1973, a la Academia de Guerra, siendo nuevamente torturado por un grupo 1973, a la Academia de Guerra, siendo nuevamente torturado por un grupo de sujetos organizados para dicho efecto, principalmente mediante aplicación de corriente eléctrica. Finalmente, luego de encontrarse recluido en el centro de detención “Melinka”, “Isla Riesco” y en la Cárcel de Valparaíso, fue liberado aproximadamente en septiembre del año 1974.”;

2º) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Humberto Aquiles Arancibia Celis, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1º y 3º del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3º) Que, por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en la causal del numeral 1º del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostiene que, por la edad de sus mandantes, debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según*



corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumenta que los sentenciadores de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ello en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación y, por lo demás, acusa una limitación injustificada de varios derechos humanos que los favorecen y que también están reconocidos en tratados internacionales, lo cual se traduce en una serie de vicios de aplicación errónea de la ley, a saber, los artículos 24, 22, 11 y 10 del Decreto 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 5° inciso segundo, 6°, 7° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República y, nuevamente, la afectación de los artículos 3°, 6° en su literal N), 13° inciso final y 22° de la Convención Interamericana Sobre La Protección de Los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;



4º) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1º de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se



plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado cuenta con defectos como los descritos pues, en sus fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado, lo cual se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición



concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo “*conforme a la ley y el mérito de autos*”, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;

6°) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7°) Que, en efecto, por parte de la defensa de los enjuiciados, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad de los encartados, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, a la lectura del fallo de primer grado, se observa que tan sólo el considerando vigésimo octavo, se refiere, de manera formal y genérica, a dicha alegación pues indica que dicha Convención es “*improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad (sic)*”;

8°) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por



el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que tan sólo menciona razones formales para descartar su aplicación, a saber, una injustificada improcedencia y el carácter de lesa humanidad del ilícito de autos, las cuales resultan insuficientes ya que, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9°) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda



instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obrequé, deducido en contra de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una



motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de



quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.

2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas



alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.

Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oír esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el



principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3°) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4°) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra



la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III.- Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”* (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y



disidencia por parte de sus autores.

Rol N° 55.606-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:18

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:18

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:19

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:52

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:20



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., Maria Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando vigesimoctavo, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur y, 87 años respecto de Santibáñez Obreque.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata



del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión*



del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4°) Que, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser*



humano.”. Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra*



parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.”

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: *“Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá*



*carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:*

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento



de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile



(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes



Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno *“con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta.”* En tanto, en lo que respecta al sentenciado Santibáñez Obreque, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 86 años que, actualmente, cuenta con *“antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal”.*

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).

En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo



que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. *Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución,*



ocasiona un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.” (Ibidem, p.167 y 168).

11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, por las argumentaciones dadas en las motivaciones precedentes, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, postura que ya ha venido esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte



Suprema N° 3.743-2024, 8.705-2024, 9.256-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 59.850-24 60.327.2024 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 303-2017, **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantiene la decisión del tribunal de alzada, en orden a aprobar las resoluciones consultadas de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, siete de marzo de dos mil veinticuatro y cuatro de julio de dos mil veinticuatro, escritas a fojas 560, 768 y 845, respectivamente.

III. Que, en lo demás, se confirma el fallo en alzada.



Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°55.606-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:21

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:22

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:22

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:53



PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:23



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha ocho de mayo de dos mil veinticuatro, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Elba Erika Arbulú Aguilera, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha seis de noviembre de dos mil veinticuatro, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado de los sentenciados, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, pertenecientes



a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo, Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que, Elba Erika Arbulú Aguilera fue ordenada detener por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), por sus actividades y orientación política. La detención se materializó el día 20 de mayo de 1974, lo que se concretó en su domicilio, ubicado en block C, población Lord Cochrane, sector Recreo Alto, Viña del Mar, pasada la medianoche, siendo conducida por agentes vestidos de civil al recinto de detención denominado Cuartel Silva Palma, emplazado en Valparaíso, lugar en que un grupo de interrogadores organizados y coordinados, también por los mandos militares, con el objeto que entregare antecedentes acerca de los compañeros que se reunían con ella en sus actividades sociales y políticas, la vendaron, la mantuvieron encerrada sin orden judicial legítima que lo justificare, la interrogaron y torturaron mediante golpes en su cuerpo, y psicológicamente, escuchando los gritos y lamentos de otros detenidos a los cuales torturaban, siendo llevada, posteriormente, a la cárcel del Buen Pastor en Valparaíso,



siguiéndosele un Consejo de Guerra identificado con el N° A-250.”;

2°) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Elba Erika Arbulú Aguilera, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1° y 3° del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3°) Que, por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en la causal del numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostiene que, por la edad de sus mandantes, debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos*. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumenta que los sentenciadores



de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ello en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación y, por lo demás, acusa una limitación injustificada de varios derechos humanos que los favorecen y que también están reconocidos en tratados internacionales, lo cual se traduce en una serie de vicios de aplicación errónea de la ley, a saber, los artículos 24, 22, 11 y 10 del Decreto 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 5° inciso segundo, 6°, 7° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República y, nuevamente, la afectación de los artículos 3°, 6° en su literal N), 13° inciso final y 22° de la Convención Interamericana Sobre La Protección de Los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;

4°) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo



ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado cuenta con defectos como los descritos pues, en sus



fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado, lo cual se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo *“conforme a la ley y el mérito de autos”*, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;

6º) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de



razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7º) Que, en efecto, aun cuando la defensa no planteó en primera instancia alegaciones relacionadas con la aludida Convención, lo cierto es que, como un aspecto propio de la edad de los sentenciados, sumado al estado de salud de los mismos y otros elementos adicionales, como es el hecho que, en procesos similares que sustancia el Ministro instructor, se ha exigido la aplicación de la aludida Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, lo cierto es que era necesario referirse a dicha alegación, cuestión que no se efectúa, aun cuando dicho insumo jurídico resulta aplicado conforme se observa del preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

De esta manera, existe una total ausencia de razonamiento sobre un aspecto relevante, el cual requería emitir un pronunciamiento, máxime si ello resulta aplicable pues se trata de una Convención promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de la República, de tal manera que el fallo se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

8º) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del



Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, deducido en contra de la sentencia de fecha seis de noviembre de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a octavo, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.



En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que no habiéndose formulado por los recurrentes alegación alguna en la instancia respecto de la aplicación de la Convención Internacional que ahora invocan en el recurso, no se cumple el supuesto que prevé el Art.775 del Código de Procedimiento Civil que habilita a esta Corte para casar de oficio una sentencia, como quiera que para estimar que los sentenciadores del grado han omitido consideraciones que sirven de fundamento a aquella –presunta omisión del numeral 4° del Art. 500 del Código de Procedimiento Penal-, es menester que tal omisión se refiera a cuestiones que hayan sido objeto del debate y de la controversia, y no de aquéllas que no tuvieron ese carácter. Luego, mal se puede tener por configurada la causal de casación en la forma por el vicio señalado, que prevé el Art. 541 N° 9 de este último estatuto procesal, si las defensas no formularon alegación alguna al respecto.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue: el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.



A lo anterior, los discrepantes reafirman su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.



2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.



Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oír esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento



y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3°) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4°) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituya un atentado contra la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la convención internacional sobre derechos de adultos mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y



las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III.- Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”* (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y disidencia por parte de sus autores.

RoI N° 59.028-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa



Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía

Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:28

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:28

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:29

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:55

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:29



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando vigesimoprimer, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur y, 87 años respecto de Santibáñez Obrequé.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata



del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión*



del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4°) Que, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser*



humano.”. Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra*



parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.”

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: “Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá



*carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:*

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento



de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile



(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes



Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno *“con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta”.* En tanto, en lo que respecta al sentenciado Santibáñez Obreque, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 86 años que, actualmente, cuenta con *“antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal”.*

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).

En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo



que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución,*



ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.” (Ibidem, p.167 y 168).

11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, por las argumentaciones dadas en las motivaciones precedentes, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, postura que ya ha venido esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte



Suprema N° 3743-2024, 8705-2024, 9256-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.029-2024, 59.850-24 60.327.2024 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha ocho de mayo de dos mil veinticuatro, por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 341-2017, **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantiene la decisión del tribunal de alzada, en orden a aprobar las resoluciones consultadas de fecha cinco de octubre de dos mil veintidós y veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, escritas a fojas 449 y 634, respectivamente.

III. Que, en lo demás, se confirma el fallo apelado.



Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°59.028-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:31

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:32

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:32

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:57



PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:33



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha seis de marzo de dos mil veinticuatro, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur, Héctor Santibáñez Obreque y Guillermo Tomás Morera Hierro, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Héctor Eduardo Cataldo Ávila, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha cinco de noviembre de dos mil veinticuatro, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado de los sentenciados, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, conformada por agentes



pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que, Héctor Eduardo Cataldo Ávila, de 24 años, ingeniero químico, administrador subrogante de ENADI Valparaíso y militante del MAPU a la fecha de los hechos, fue ordenado detener por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), siendo detenido el 15 de octubre de 1973 , desde el domicilio de sus padres por una patrulla de infantes de marina, siendo trasladado a la Academia de Guerra Naval, sitio en el cual fue sometido a interrogatorios con torturas durante los cinco días que estuvo detenido , manteniéndolo durante ese periodo privado de libertad sin orden judicial que lo justificare. Recibió golpes de puños en el estómago y en el pecho, y golpes de laque en la espalda y pierna, asimismo le aplicaron corriente eléctrica en diferentes partes de su cuerpo y también le colocaron unas piezas metálicas, como llaves de candado, en sus manos, abdomen y genitales, piezas por la que le transmitían electricidad, amenazándolo con interrogar y torturar a su padre y a su cónyuge. Habitualmente eran dos las personas que lo interrogaban, siempre estuvo amarrado y con su vista vendada durante los interrogatorios. Posteriormente lo llevaron al Buque Lebu, que se encontraba en el molo de



abrigo. Permaneció aproximadamente por un mes en este buque, entre el 25 de octubre de 1973 y el 25 de noviembre de 1973, le pegaron culatazos y caminó sobre su cuerpo un subteniente. Sólo el 21 de diciembre de 1973 se le tomó declaración indagatoria en la Fiscalía Naval, supuestamente por los hechos denunciados por el Servicio de Inteligencia Naval. Fue trasladado a la Cárcel Pública, obteniendo su libertad el 26 de septiembre de 1975.”;

2°) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Héctor Eduardo Cataldo Ávila, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1° y 3° del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3°) Que, por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en la causal del numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostiene que, por la edad de sus mandantes, debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, *los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.* Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda,



agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumenta que los sentenciadores de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ello en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación y, por lo demás, acusa una limitación injustificada de varios derechos humanos que los favorecen y que también están reconocidos en tratados internacionales, lo cual se traduce en una serie de vicios de aplicación errónea de la ley, a saber, los artículos 24, 22, 11 y 10 del Decreto 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 5° inciso segundo, 6°, 7° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República y, nuevamente, la afectación de los artículos 3°, 6° en su literal N), 13° inciso final y 22° de la Convención Interamericana Sobre La Protección de Los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;

4°) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por



remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley



que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado cuenta con defectos como los descritos pues, en sus fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado, lo cual se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo *“conforme a la ley y el mérito de autos”*, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;



6°) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7°) Que, en efecto, por parte de la defensa de los enjuiciados, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad de los encartados, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, a la lectura del fallo de primer grado, se observa que tan sólo el considerando trigésimo primero, se refiere, de manera formal y genérica, a dicha alegación pues indica que dicha Convención es *improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad (sic)*;

8°) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que tan sólo menciona razones formales para descartar su aplicación, a saber, una injustificada improcedencia y el carácter de lesa humanidad del ilícito de autos, las cuales resultan insuficientes ya que, la Convención Interamericana sobre la Protección de



los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9°) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:



I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur, Guillermo Tomás Morera Hierro y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, deducido en contra de la sentencia de fecha cinco de noviembre de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta



materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.



2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.



Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oirá esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento



y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3°) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4°) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y



las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III. Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”* (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y disidencia por parte de sus autores.

RoI N° 59.029-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa



Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía

Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:34

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:35

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:35

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:00:59

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:36



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando trigésimo primero, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur, 86 años en relación con Santibáñez Obreque y, 75 años respecto de Morera Hierro.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata



del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión*



del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4°) Que, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser*



humano.”. Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra*



parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.”

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: “Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá



*carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:*

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento



de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile



(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes



Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno “*con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta*”. En tanto, en lo que respecta al sentenciado Morera Hierro, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 75 años que, actualmente, presenta una hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía hipertrófica/coronaria, aneurisma aórtico torácico, TEVAR toraco abdominal, endoprótesis aórtica abdominal endovascular, insuficiencia mitral leve, insuficiencia aórtica moderada, enfermedad coronaria 2 vasos y cuya evaluación EMPAM, el resultado es de “*autovalencia con riesgo*”. Y, finalmente, sobre el sentenciado Santibáñez Obreque se indica que es un interno 86 años que, actualmente, cuenta con “*antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal*”.

9º) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano



penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).

En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos. Ed. Atelier Libros



Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución, ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.”* (Ibidem, p.167 y 168).

11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control



y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, por las argumentaciones dadas en las motivaciones precedentes, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, postura que ya ha venido esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte Suprema N° 3743-2024, 8705-2024, 9256-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.850-24 60.327.2024 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha seis de marzo de dos mil veinticuatro., por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 300-2017, **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur, Héctor Vicente Santibáñez Obreque y Guillermo Tomás Morera Hierro, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una



medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantiene la decisión del tribunal de alzada, en orden a aprobar las resoluciones consultadas de fechas seis de marzo de dos mil veinticuatro, veinte de mayo de dos mil veintiuno, veintitrés de agosto de dos mil veintidós, tres de enero de dos mil veinticuatro, cuatro de marzo de dos mil veinticuatro y veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, escritas, la primera, en la sentencia definitiva que rola entre fojas 767 a 824 y, las restantes escritas a fojas 355, 508, 561, 764 y 857, respectivamente.

III. Que, en lo demás, se confirma el fallo apelado.

Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°59.029-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.



MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:37

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:38

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:38

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:01:00

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:39



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Héctor Vicente Santibañez Obreque y Sergio Hevia Febres, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Carlos Francisco Otazo Román, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, aprobando, además, el sobreseimiento parcial y definitivo respecto del sentenciado Riquelme Villalobos.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado de los sentenciados, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó



activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo, Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que, el 23 de abril de 1974, Carlos Francisco Otazo Román fue detenido en la vía pública en la localidad de Quillota, siendo trasladado al Cuartel Silva Palma, ubicado en Playa Ancha, Valparaíso, donde lo dejan en una sala común que estaba al lado de la cancha donde había otros prisioneros, lugar donde es mantenido encerrado sin orden que lo justificara. Al día siguiente lo llevan a la pieza de interrogatorios, lugar en que fue interrogado por un grupo de interrogadores organizados, en más de una oportunidad siendo golpeado y torturado mediante aplicación de corriente en su cuerpo, encontrándose además con su vista vendada, permaneciendo varios días en este lugar, lapso en que fue interrogado en diversas oportunidades, siendo posteriormente conducido hasta la Cárcel Pública de Valparaíso, y juzgado por un Consejo de Guerra, el que terminó en definitiva con una pena de extrañamiento.



En efecto, con fecha 14 de marzo de 1975, un Consejo de Guerra condenó a Carlos Otazo Román a las penas de cuatro años de extrañamiento menor en su grado máximo como autor del delito previsto en el artículo 4 letra d) de la Ley 12.297 y a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo como autor del delito previsto y sancionado en los artículos 1 y 2 del Decreto Ley N° 77, y luego, con fecha 23 de abril de 1975 se aprobó la sentencia referida por el Jefe Militar de la Zona de la Provincia de Valparaíso, con declaración que Carlos Francisco Otazo Román queda condenado a la pena de tres años y un día de extrañamiento menor en su grado máximo como autor del delito previsto en el artículo 4 de la Ley 12.297 y a la pena de cuatro años de extrañamiento menor en su grado máximo como autor del delito previsto y sancionado en los artículos 1 y 2 del Decreto Ley N° 77, por lo que salió del país junto a su familia a Oslo, Noruega. Hasta la fecha de su extrañamiento consta que Otazo Román se encontró privado de libertad en la Cárcel Pública de Valparaíso.”;

2°) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Carlos Francisco Otazo Román, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1° y 3° del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3°) Que, por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en la causal del numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostiene que, por la edad de sus mandantes, debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la



Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos*. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumenta que los sentenciadores de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ello en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación y, por lo demás, acusa una limitación injustificada de varios derechos humanos que los favorecen y que también están reconocidos en tratados internacionales, lo cual se traduce en una serie de vicios de aplicación errónea de la ley, a saber, los artículos 24, 22, 11 y 10 del Decreto 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 5° inciso segundo, 6°, 7° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República y, nuevamente, la



afectación de los artículos 3°, 6° en su literal N), 13° inciso final y 22° de la Convención Interamericana Sobre La Protección de Los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;

4°) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de



diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado cuenta con defectos como los descritos pues, en sus fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado, lo cual se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por



fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo “*conforme a la ley y el mérito de autos*”, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este Tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;

6º) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7º) Que, en efecto, por parte de la defensa de los enjuiciados, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad de los encartados, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, a la lectura del fallo de primer grado, se observa que tan sólo el considerando trigésimo séptimo, se refiere, de manera formal y genérica, a



dicha alegación pues indica que dicha Convención es *improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad (sic)*;

8°) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que tan sólo menciona razones formales para descartar su aplicación, a saber, una injustificada improcedencia y el carácter de lesa humanidad del ilícito de autos, las cuales resultan insuficientes ya que, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9°) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de



casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur, Sergio Hevia Febres y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, deducido en contra de la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo**



que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados



por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.

2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a*



programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.

Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución,



entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oirá esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3°) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4°) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.



El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III. Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión*



de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”
(<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y disidencia por parte de sus autores.

Rol N° 59.850-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:42

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:42

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:43

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:01:02



PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:44



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando trigésimo séptimo, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur, 87 años respecto de Santibáñez Obreque y, 90 años en relación a Hevia Febres.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata



del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión*



del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4°) Que, de igual forma, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser*



humano.”. Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra*



parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.”

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: “Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá



*carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:*

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento



de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile



(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes



Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno *“con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta”* En tanto, en lo que respecta al sentenciado Santibáñez Obreque, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 86 años que, actualmente, cuenta con *“antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal”.* Finalmente, no es diferente la situación del preso Sergio Hevia Febres, de quien Gendarmería de Chile expuso que se trata de un *“paciente adulto mayor de 90 años, quien presenta antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiopatía hipertensiva, con uso de marcapasos, artrosis severa rodilla derecha, hipoacusia bilateral con uso de audífonos, estando, a la fecha del informe, hospitalizado por urgencia por un cuadro gastrointestinal”.*

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello



del aludido autor español), *“un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).

En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. *Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora



hispanica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución, ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.”* (Ibidem, p.167 y 168).

11º) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1º letra d), numeral 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria



total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, por las argumentaciones dadas en las motivaciones precedentes, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, postura que ya ha venido esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte Suprema N° 3743-2024, 8705-2024, 9256-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 60.327.2024 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, por el Ministro en Visita extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 258-2017, **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur, Sergio Hevia Febres y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.



II. Que, se **mantienen** las decisiones del tribunal de alzada, en orden a aprobar las resoluciones consultadas de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, doce de enero de dos mil veintidós, dieciséis de enero, diez de junio y cuatro de octubre, estos últimos del año dos mil veinticuatro, las cuales decretan los sobreseimientos parciales y definitivos de Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Jaime Segundo Lazo Pérez, Bertalino Segundo Castillo Soto, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Alejo Esparza Martínez, respectivamente.

De igual forma, por los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada, se **preservan** las decisiones adoptadas en torno a la consulta efectuada sobre la absolución del sentenciado Guillermo Tomás Morera Hierro, la cual se mantiene; lo mismo que la decisión confirmatoria asociada a la decisión civil contenida en la sentencia definitiva que se revisa, la cual rechazó las excepciones de prescripción extintiva y reparación satisfactiva del daño y condenó al Fisco de Chile al pago de la suma de \$80.000.000.-, con los reajustes e intereses que indica, a favor de Carlos Francisco Otazo Román.

III. Que, en lo demás, se confirma el fallo apelado.

Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.



Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°59.850-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:45

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:46

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:46

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:51:38

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:47



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Héctor Raúl Yáñez Araos, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado de los sentenciados, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, con formada por agentes



pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica. Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo, Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que, Héctor Yáñez Araos fue ordenado detener por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (S.I.C.A.J.S.I.), debido a su militancia en el Partido Comunista, lo que se concretó el 19 de junio de 1974, aproximadamente a las 5:00 horas, en su domicilio ubicado en La Planchada N° 3671, departamento 11, Valparaíso, siendo conducido por funcionarios militares al Cuartel Silva Palma, estando en ese lugar, organizados y coordinados por los mandos militares, un grupo de interrogadores, con el objeto que entregare antecedentes acerca de sus compañeros del partido, encontrándose vendado, sitio en el que procedieron a mantenerlo encerrado sin orden judicial que lo justificare, interrogarlo, y torturarlo mediante amenazas de abusar sexualmente de su cónyuge y de su hija, quien entonces tenía siete años de edad, simulacros de fusilamiento, privación de sueño, de alimentos y medicamentos propios de su enfermedad de diabetes mellitus, entre otros. Fue



puesto a disposición de la Fiscalía Naval recién en septiembre de 1974, y luego llevado a la cárcel pública de Valparaíso, lugar desde el cual fue finalmente liberado bajo fianza el 24 de febrero de 1976 y el 31 de julio siguiente se decretó que no existían delitos comprendidos en la jurisdicción militar, por lo que fue sobreseído de la causa Consejo de Guerra A-442.”;

2°) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Héctor Raúl Yáñez Araos, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1° y 3° del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3°) Que, por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en la causal del numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostiene que, por la edad de sus mandantes, debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos*. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que



establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumenta que los sentenciadores de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ello en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación y, por lo demás, acusa una limitación injustificada de varios derechos humanos que los favorecen y que también están reconocidos en tratados internacionales, lo cual se traduce en una serie de vicios de aplicación errónea de la ley, a saber, los artículos 24, 22, 11 y 10 del Decreto 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 5° inciso segundo, 6°, 7° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República y, nuevamente, la afectación de los artículos 3°, 6° en su literal N), 13° inciso final y 22° de la Convención Interamericana Sobre La Protección de Los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;

4°) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia



cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1° de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando,



de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5º) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado cuenta con defectos como los descritos pues, en sus fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado, lo cual se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo *“conforme a la ley y el mérito de autos”*, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este Tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;



6º) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7º) Que, en efecto, por parte de la defensa de los enjuiciados, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad de los encartados, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, a la lectura del fallo de primer grado, se observa que tan sólo el considerando vigesimoséptimo, se refiere, de manera formal y genérica, a dicha alegación pues indica que dicha Convención es *“improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad (sic)”*;

8º) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que tan sólo menciona razones formales para descartar su aplicación, a saber, una injustificada improcedencia y el carácter de lesa humanidad del ilícito de autos, las cuales resultan insuficientes ya que, la Convención Interamericana sobre la Protección de



los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9°) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:



I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, deducido en contra de la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta



materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.



2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.



Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oír esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento



y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3°) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4°) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y



las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III.- Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”* (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y disidencia por parte de sus autores.

RoI N° 32.864-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa



Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía

Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:48

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:49

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:49

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:51:39

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:50



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando vigesimoséptimo, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur y, 87 años respecto de Santibáñez Obrequé.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata



del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión*



del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4°) Que, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser*



humano.”. Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra*



parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.”

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: *“Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá*



*carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:*

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento



de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile



(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes



Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno *“con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta*“. En tanto, en lo que respecta al sentenciado Santibáñez Obreque, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 86 años que, actualmente, cuenta con *“antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal*“.

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).

En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo



que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. *Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución,*



ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.” (Ibidem, p.167 y 168).

11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, de esta forma, esta Corte comparte el dictamen fiscal emitido, el cual propuso la revocación del fallo de primera instancia, proponiendo que la pena aplicada sea sustituida por la reclusión domiciliaria, tal como ha sido la postura que ya ha venido esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares,



han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte Suprema N° 3743-2024, 8705-2024, 9256-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 59.850-24 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 186-2016, **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantiene la decisión del tribunal de alzada, en orden a aprobar las resoluciones consultadas de fechas veinticinco de octubre de dos mil veintidós y de ocho de marzo de dos mil veinticuatro, escritas a fojas 540 y 566, respectivamente.

III. Que, en lo demás, se confirma el fallo apelado.



Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°60.327-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:51

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:52

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:52

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:51:40



PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:53



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Hector Vicente Santibáñez Obreque, Sergio Hevia Febres y Gilda Mercedes Ulloa Valle, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de María Victoria Yáñez Rojas, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con fecha de tres de diciembre de dos mil veinticuatro, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada, aprobando, además, el sobreseimiento parcial y definitivo respecto del sentenciado Riquelme Villalobos.

En contra de esta última sentencia, se dedujeron dos recursos de casación en el fondo por parte de los apoderados de los sentenciados, respecto de los cuales se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que a partir del 11 de septiembre de 1973, personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones conformaron grupos



operativos encargados de perseguir a las personas contrarias al régimen militar imperante en la época, contando para ello con recursos materiales y humanos, lugares de detención, vehículos, armas, entre otros, dentro de organizaciones jerarquizadas y de mando, dedicadas a las actividades que permitieron la ocurrencia de los delitos que se han denunciado precedentemente. La autoridad encargada de la seguridad interior CAJSI (Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior) crea su propio servicio de inteligencia denominado con la sigla SICAJSI el que ya se encontraba funcionando en época en que ocurren los hechos. Este organismo estructurado, jerarquizado y con reglas de funcionamiento definidas por la autoridad central, tenía como misión cumplir las órdenes que emanaban del CAJSI relacionadas con la seguridad interior dirigidas a la eliminación, investigación y paralización de cualquier acción delictual contra la seguridad del Estado. Para el cumplimiento de estas directrices, La Jefatura del SICAJSI emitía órdenes de investigar, allanar y detener, las que eran llevadas a efecto por personal que integraba los comandos de operaciones contra insurgencia (COC) que correspondía a funcionarios de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes dependían jerárquicamente del jefe del departamento de operaciones del mismo organismo, el que a su vez se rendía cuenta directa de los resultados de las operaciones al jefe del SICAJSI, que a la época en que ocurrieron los hechos correspondía al capitán de navío Sergio Barra Von Kretschmann, actualmente fallecido. Ha quedado establecido que el jefe del SICAJSI contaba con jefes de servicio, oficiales alumnos del curso de Estado Mayor, quienes supervisaban y daban las órdenes necesarias para el



funcionamiento del servicio, al actuar como subrogantes del jefe del SICAJSI cuando éste no se encontraba en funciones, teniendo facultades incluso para firmar órdenes de detención y de investigar y para determinar el destino de los detenidos. Estas órdenes eran ejecutadas al margen de la legalidad para justificar o sustentar la comisión de ilícitos como detenciones ilegales, allanamientos de morada, aplicación de rigor innecesario, privaciones de libertad de personas por largos periodos de tiempo en lugares no autorizados y la aplicación de tormentos físicos y psicológicos. Que en dicho contexto conforme a los antecedentes pormenorizados se ha podido establecer que María Victoria Yáñez Rojas fue detenida en noviembre de 1974 por dos efectivos del CIRE Valparaíso que vestían de civil, quienes allanaron su casa en búsqueda de armas y de Eduardo Morris Barrios, militante comunista que era requerido por la autoridad jurisdiccional de la época y que hasta esa fecha no había sido habido por sospechas de encontrarse escondido en la casa de la víctima de autos. Fue sacada de su casa y llevada al Cuartel Silva Palma, ubicado en la ciudad del Valparaíso, permaneciendo aproximadamente un mes en ese recinto, siendo sometida a múltiples interrogatorios por un grupo de funcionarios Infantes de Marina, que se encontraba organizado y coordinado por el mando del SICAJSI, cuyos integrantes sometieron en diversas oportunidades a la víctima a torturas consistentes en aplicación de corriente eléctrica en manos, pechos, estómago y genitales y con golpes y amenazas, a consecuencia de lo cual quedó con graves secuelas psicológicas y físicas, en particular en su aparato auditivo. Además de los interrogatorios era sacada del recinto a las calles de la ciudad a un procedimiento conocido como “poroteo”, en el cual la detenida sale a la calle junto con un agente



del Estado con el objeto de que ella reconozca a personas en la calle y con relación a ese procedimiento dichas personas eran tomadas detenidas por sospecha de tener relación con el detenido en los actos subversivos que se le imputan. Posteriormente fue trasladada a la cárcel de mujeres del Buen Pastor de Valparaíso donde permaneció en prisión preventiva por un año hasta octubre de 1975. Que luego de dictada la sentencia por el Consejo de Guerra es finalmente condenada a las penas de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo por tenencia de armas, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley 17.798 y a la pena de dos años de presidio menor en su grado medio como autora del delito establecido en el artículo 13 de la Ley sobre Control de Armas.”;

2º) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de María Victoria Yáñez Rojas, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1º y 3º del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3º) Que, por parte de la defensa de los sentenciados, se formularon dos recursos de casación en el fondo, los cuales se sustentan en la causal del numeral 1º del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y, al respecto, sostienen que, por la edad de sus mandantes, se debió aplicarse la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, los *Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y,*



según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos. Así, consideran una obligación estatal que debió ser ponderada pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final y 22 de la mentada Convención Internacional.

Asimismo, como otro tópico de la causal, argumentan que los sentenciadores de instancia desatendieron el límite temporal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ello en el entendido que los hechos se suscitan con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho instrumento internacional en nuestro país, de allí que, en su concepto, conforma un error su aplicación y, por lo demás, acusa una limitación injustificada de varios derechos humanos que los favorecen y que también están reconocidos en tratados internacionales, lo cual se traduce en una serie de vicios de aplicación errónea de la ley, a saber, los artículos 24, 22, 11 y 10 del Decreto 104 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículos 5° inciso segundo, 6°, 7° y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República y, nuevamente, la afectación de los artículos 3°, 6° en su literal N), 13° inciso final y 22° de la Convención Interamericana Sobre La Protección de Los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En definitiva, solicitan anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;



4º) Que, para abordar el estudio de los recursos reseñados, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos yerros de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1º de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se



plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, los recursos de invalidación presentados cuentan con defectos como los descritos pues, en sus fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende incluir dentro del motivo de nulidad planteado, lo cual se denota cuando, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada, lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo de los recursos formulados ya que, asociado a la exigencia de una



petición concreta, lo planteado por los articulistas, la dictación de una sentencia de reemplazo *“conforme a la ley y el mérito de autos”*, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este Tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo de los recursos impetrados;

6º) Que, no obstante el rechazo de los arbitrios de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7º) Que, en efecto, por parte de la defensa de los enjuiciados, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad de los encartados, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, a la lectura del fallo de primer grado, se observa que tan sólo el considerando trigésimo cuarto, se refiere, de manera formal y genérica, a dicha alegación pues indica que dicha Convención es *“improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad (sic)”*;



8°) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que tan sólo menciona razones formales para descartar su aplicación, a saber, una injustificada improcedencia y el carácter de lesa humanidad del ilícito de autos, las cuales resultan insuficientes ya que, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2° artículo 5° de la Constitución Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9°) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se



describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZAN** los recursos de casación en el fondo interpuestos por los apoderados de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur, Hector Vicente Santibáñez Obreque, Sergio Hevia Febres y Gilda Mercedes Ulloa Valle, deducidos en contra de la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar los recursos de casación en el fondo formulados por las defensas de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones



en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma



de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.

2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo*



con sus ordenamientos jurídicos internos.”

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.

Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oír esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de



prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3º) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4º) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento



de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III.- Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”* (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).



Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y disidencia por parte de sus autores.

Rol N° 61.017-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:54

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:55

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:55

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:51:42

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:56



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando trigésimo cuarto, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur, 87 años respecto de Santibáñez Obreque, 90 años en relación a Hevia Febres y 71 años en torno a la inculpada Ulloa Ovalle.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos encartados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata del juzgamiento de adultos mayores



que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el*



sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que *"la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan"* (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publisng Chile. Año 2012).

4º) Que, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano."* Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su inciso 2° del artículo 5,



bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: *“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”*

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5°) Que, de igual forma, incluso derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra parte, en cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos*



humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.”

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: “*Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones*



del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del Examen de la reducción de la pena, señalando:

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas;
o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la



periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.



8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile (A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse



determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien cabe considerarlos en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).

Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno *“con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en*



tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad. De igual forma, precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta. En tanto, en lo que respecta al sentenciado Santibáñez Obrequé, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 86 años que, actualmente, cuenta con “antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal”. Finalmente, no es diferente la situación del preso Sergio Hevia Febres, de quien Gendarmería de Chile expuso que se trata de un “paciente adulto mayor de 90 años, quien presenta antecedentes de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiopatía hipertensiva, con uso de marcapasos, artrosis severa rodilla derecha, hipoacusia bilateral con uso de audífonos, estando, a la fecha del informe, hospitalizado por urgencia por un cuadro gastrointestinal”.

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto aflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – aflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).



En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. *Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la*



pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución, ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.” (Ibidem, p.167 y 168).

11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, una situación disímil es la que afecta a la acusada Ulloa Valle, de quien sólo consta el rango etario, el cual, si bien se encuentra dentro del espectro de protección de la respectiva Convención, lo cierto es que, cómo se expresa en los considerandos precedentes, en el caso de sanciones por



crímenes de lesa humanidad, ese único elemento no es suficiente para obtener un cumplimiento diferenciado en cuanto a la pena impuesta, incluso, recordando en esto a la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, son varios los aspectos que deben ser sopesados para que, una decisión de esta clase, *no implique la extinción o perdón de la pena*, de allí que se desestimaré una medida alternativa de observancia al castigo impuesto.

13°) Que, por las argumentaciones dadas en las motivaciones precedentes, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, postura que ya ha venido esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte Suprema N° 8705-2024, 9256-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 59.850-24 y 60.327.2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 93-2016, **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur, Sergio Hevia Febres y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.



El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se **mantienen** las decisiones del tribunal de alzada, en orden a **aprobar** el fallo consultado de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, en aquella parte que absuelve al inculpado Eduardo Mauricio Núñez Contreras, del cargo de haber sido autor del delito de secuestro con grave daño en la persona de María Victoria Yáñez Rojas.

En un mismo sentido, se **aprueban** los sobreseimientos definitivos y parciales consultados de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, escritos a fojas 450, 450 vuelta y 1156, en relación a Alejo Esparza Martínez; de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, escrito a fojas 659, en cuanto a Ricardo Alejandro Riesco Cornejo; de siete de junio de dos mil veinticuatro, escrito a fojas 1123, respecto a Valentín Riquelme Villalobos.

Finalmente, por los fundamentos expuestos por la Corte de Apelaciones, se **preserva** la decisión adoptada en torno a la consulta efectuada sobre la decisión civil contenida en la sentencia definitiva que se revisa, la cual, junto con rechazar las excepciones de reparación satisfactiva y prescripción opuestas por el demandado, Fisco de Chile, fija la indemnización de perjuicios en favor de la víctima en la suma de \$70.000.000.-, con los reajustes e intereses determinados en el fallo de primera instancia, concedida en favor de doña María Victoria Yáñez Rojas.

III. Que, en lo demás, se confirma el fallo en alzada.



Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°61.017-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:57

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:42:58

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:42:59

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:51:43

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:42:59



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., Maria Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En estos autos, el Ministro en Visita Extraordinaria, señor Max Cancino Cancino, con fecha veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dicta sentencia definitiva en la cual condena a Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, como autores del delito de secuestro con grave daño en la persona de Juan Nicolás Arancibia Jerias, aplicándole a cada uno la pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias legales.

Impugnada esta decisión, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, conociendo de los recursos enderezados en su contra, procede a confirmar la decisión impugnada con fecha cuatro de enero de dos mil veinticuatro.

En contra de esta última sentencia, se dedujo un recurso de casación en el fondo por parte del apoderado de los sentenciados, respecto del cual se ordenó traer los autos en relación.

Finalmente, conforme lo informa el señor Relator, encontrándose los autos en estado de ser vistos, con fecha quince de febrero de dos mil veinticuatro se produjo la muerte del sentenciado Riquelme Villalobos.

CONSIDERANDO:

1º) Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando segundo del fallo de primer grado, el cual se mantuvo en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos objeto de juzgamiento:

“Que existió una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada denominada Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área



Jurisdiccional de Seguridad Interior, conocida como SICAJSI, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973, conformada por agentes pertenecientes a las diversas reparticiones de la defensa nacional, particularmente por funcionarios de la Armada de Chile, cuyo objetivo principal fue la represión de personas opositoras al régimen militar, para lo cual se procedía a su búsqueda y detención, las que luego eran privadas de libertad para la obtención de información mediante tortura física y psicológica.

Luego de ubicar y detener a las personas, las patrullas armadas los conducían hasta la Academia de Guerra Naval, o al edificio contiguo Cuartel Silva Palma, ubicados ambos en Playa Ancha, Valparaíso, lugar donde las personas eran encerradas e interrogadas.

Que en una fecha no precisada del mes de enero de 1974, Juan Arancibia Jerias fue ordenado detener por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), en atención a su militancia política en el Partido Socialista, lo que se concretó en su domicilio ubicado en calle Moctezuma N°731, Cerro Los Placeres, Valparaíso, donde vivía con sus padres, siendo conducido por funcionarios militares al Cuartel Silva Palma, lugar en que un grupo de interrogadores organizados y coordinados, también por los mandos militares, con el objeto que entregare antecedentes acerca de otros militantes del partido político nombrado, procedieron a mantenerlo encerrado sin orden judicial que lo justificare, vendarlo, interrogarlo y torturarlo mediante diversas técnicas, entre ellas, aplicación de corriente en su cuerpo “el teléfono” (golpes con las manos abiertas en ambos oídos) y otros golpes en su cuerpo, siendo conducido posteriormente a los recintos de detención llamados Isla



Riesco y Melinka, y finalmente a la Cárcel Pública de Valparaíso, siendo liberado desde ese lugar en agosto de 1974, haciendo presente que en la causa militar en copia tenida a la vista aparece que la víctima sólo fue puesta a disposición de la Fiscalía el 24 de mayo de 1974”;

2º) Que, lo anterior, a juicio de los sentenciadores de instancia, configura la existencia de un delito de secuestro con grave daño en la persona de Juan Nicolás Arancibia Jerias, previsto y sancionado en el artículo 141, incisos 1º y 3º del Código Penal vigente a la fecha de los hechos, el cual se califica como un delito de lesa humanidad, consideraciones que fueron compartidas en sede de alzada;

3º) Que, por parte de la defensa de los sentenciados, se formuló un recurso de casación en el fondo, el cual se sustenta en las causales de los numerales 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.

Respecto del capítulo de invalidación del numerando séptimo, la recurrente cuestiona la forma de construir las presunciones de culpabilidad, las que fueron realizadas en contravención a lo que establece el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal pues ellas se basan en antecedentes que no acreditan su culpabilidad y, además, ellos fueron obtenidos por medio de una medida para mejor resolver realizada por el tribunal, lo cual afecta el principio de objetividad, el principio de inocencia y la bilateralidad de la audiencia que debe regir en toda investigación criminal, todo lo cual se vio mermado en este caso, ya que la actuación oficiosa del juzgador no le entregó ninguna posibilidad a los sentenciados de controvertir dicha información aportada.

Considera que no existió un proceso legalmente tramitado respecto de los enjuiciados, asegurando que debe regir el principio *in dubio pro reo* y cuando el



tribunal decide ejecutar una medida como la descrita, le resta eficacia a lo dispuesto en el artículo 109 del código adjetivo, en cuanto ordena *investigar, con igual celo, no solo los hechos y circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los inculpados, sino también los que les eximan de ella o la extingan o atenúen*.

En tal sentido, cuestiona la valoración probatoria realizada por el Tribunal, lo que vulneró los artículos 459, 464, y 488 del Código de Procedimiento Penal, asegurando que no existe sustento probatorio para acreditar la participación de ninguno de los investigados e incluso, ni siquiera existe soporte sobre algunos importantes aspectos propios de la investigación.

Enseguida, sobre la causal de casación del numeral 1° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, sostiene que debió tenerse a la vista la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual fue promulgada mediante el Decreto N° 162. En este instrumento, en su artículo 13, se explica que, *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos”*. Así, considera una obligación estatal que debió ser ponderada, pues la imposición de una pena privativa de libertad en un centro de reclusión distinto a su domicilio, sin duda, agrava la pena impuesta, erigiéndose como un yerro de derecho como el que establece el numeral 1° del artículo 546 del Código de Enjuiciamiento Penal e infringe las disposiciones contenidas en los artículos 3° letra N), 6°, 13 inciso final



y 22 de la mentada Convención Internacional.

En definitiva, solicita anular la sentencia impugnada, y dictar otra de reemplazo conforme a la ley y el mérito de autos;

4º) Que, para abordar el estudio del recurso reseñado, necesario resulta destacar parte de las características del libelo de casación, el cual conforma un arbitrio de carácter formal y de derecho estricto, en el que se exige el cumplimiento de los requisitos que la ley procesal fija para ellos. En tal sentido, por remisión del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, en esta materia cobra plena aplicación el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, el cual fija los requisitos de un recurso de invalidación de esta clase. En esta norma, al momento de recurrir, se ordena que el libelo exprese en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo o resolutivo del fallo. Ambas exigencias, con toda claridad, deben reflejarse en una petición clara y concreta que se vincule con los capítulos de casación, características que no se observan en el recurso en estudio.

Además, como parte de la naturaleza formal y rigurosa del recurso de casación en el fondo, también lo conforma el tratamiento de las causales de invalidación, aspecto que viene asociado a la precisión que se exige para describir los vicios invocados y cuya infracción importa una vaguedad y falta de determinación de las leyes que se suponen infringidas y de la forma cómo se ha producido la infracción que se denuncia (Rev. de Der. y Jurisp. Cas. fondo. 1º de diciembre de 1964. Sec. IV, parte II, pág. 488. Rev. año 1964).

De igual forma, como otra expresión de la cabal formalidad que se asocia a



esta clase de impugnaciones, lo cierto es que ella debe contener peticiones claras y concretas, en las que entregue una competencia cierta al tribunal de casación, el que debe tener total certeza sobre las mismas, lo cual no se cumple cuando se plantean solicitudes formuladas de manera subsidiaria, alternativa y/o imprecisa pues, como reiteradamente ha sido sostenido por esta Corte, bajo la formulación de motivos condicionados a la procedencia de uno u otro o en que exista una palmaria vaguedad, se coloca al tribunal de casación en la tarea de optar por la ley que se denuncia amagada, lo que se contrapone a lo que se ha venido indicando, de allí que el recurrente debe optar por una sola línea de argumentos jurídicos y mantenerla en el desarrollo que efectúa en el recurso;

5°) Que, a la luz de lo anterior, de inmediato resalta el hecho que, el recurso de invalidación presentado, cuenta con los defectos ya descritos pues, en sus fundamentos, no se advierte un tratamiento adecuado sobre los vicios que pretende analizar ya que, en realidad, de forma velada, el recurrente pretende la obtención de una forma alternativa de cumplimiento de la pena impuesta, aspecto que no conforma un tópico que pueda debatirse por vía de casación. Es más, tal como se extrae del tenor del código adjetivo, al proponer una causal como la planteada (artículo 546 N° 1 del estatuto procesal penal vigente a la época), lo que se cuestiona es la imposición de la pena en relación al delito, asegurando que se ha cometido un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, en este caso, se busca la obtención de una forma distinta de cumplimiento, aspecto que no es propio de



un arbitrio de esta clase y menos de la causal de invalidación formulada.

Por otro lado, el libelo impugnatorio esgrime causales de casación que son incompatibles, existiendo un consenso asociado a la disconformidad y contradicción vinculada a las causales de casación de los numerales 1° y 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, pues los argumentos que pueden conformar uno u otro resultan incompatibles entre sí, por ello antinómicos, es decir, son contrarios a la lógica y la epistemología, ya que, por un lado, quien propone la primera de las causales de casación en el fondo que menciona el artículo 546 del código adjetivo, per se, debe aceptar los hechos que la sentencia tiene por acreditados y lo que cuestiona, en realidad, es la imposición de la pena en relación al delito, cometiendo un error de derecho, ya sea al determinar la participación que le ha cabido al condenado en el delito, ya sea al calificar los hechos que constituyen circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la naturaleza y el grado de la pena. En cambio, al proponer un motivo de nulidad como el que describe el numeral séptimo de la mentada disposición, precisamente controvierte la observancia de las leyes reguladoras de la prueba en la construcción de dichos hechos, de tal manera que, como puede advertirse, los motivos no son armónicos sino, más bien, contrapuestos o antagónicos.

Sumado a lo anterior, lo cierto es que respecto al capítulo de nulidad establecido en el numerando 7°, el recurrente cuestiona el ejercicio de una facultad judicial como es la dictación de una medida para mejor resolver, lo cual fue ejercido dentro del marco de la legalidad e incorporó piezas de un proceso criminal seguido, igualmente, en contra de los enjuiciados, de tal manera que no



se observa ninguna clase de ilegalidad en dicho accionar y, en realidad, lo que la recurrente cuestiona no es otra cosa que la valoración ejecutada por los jurisdicentes a dichos medios probatorios, señalando que ella vulnera las leyes reguladoras de la prueba y no permitiría alcanzar a la conclusión condenatoria arribada. Sin embargo, más allá de esta afirmación, tan general como imprecisa, ella no alcanza para conformar el vicio de casación que se plantea, pues en ninguna parte de su arbitrio se desarrolla de manera adecuada la forma en que se afectaron dichas normas de valoración. Es más, el articulista tan sólo asevera la infracción y la vincula con principios procesales que, de ninguna forma se advierten vulnerados, de allí que, en realidad, el abogado defensor busca que esta Corte efectúe un ejercicio de revaloración probatoria que está vedado para esta sede, sobre todo si se constata que ellos – el acervo justificante – fueron debidamente justipreciados por los sentenciadores de instancia.

Finalmente, siguiendo con el análisis formal, existe otro vicio que conlleva el rechazo del recurso formulado ya que, asociado a la exigencia de una petición concreta, lo planteado por el articulista, la dictación de una sentencia de reemplazo *“conforme a la ley y el mérito de autos”*, no tiene la característica de precisión, claridad y certeza que le permita a este Tribunal de casación determinar el marco de su competencia, lo cual conduce al rechazo del recurso impetrado;

6º) Que, no obstante el rechazo del arbitrio de casación, durante el estado de acuerdo, se advirtió la existencia de algunos vicios de forma en la sentencia de segunda instancia, la cual confirmó en su totalidad la del tribunal *a quo* y con ello hizo suyos todos los aspectos referidos en aquélla, entre ellos, la falta de



razonamientos asociados a la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores;

7º) Que, en efecto, por parte de la defensa de los enjuiciados, como parte de sus alegaciones, se planteó una petición acerca del cumplimiento de la pena en la modalidad de arresto domiciliario, ello en consideración a la edad de los encartados, sentando como un apoyo legal a su petición la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en particular lo que menciona el preámbulo del mismo y lo que establecen los artículos 9 y 13 del referido instrumento internacional.

Dicha petición, a la lectura del fallo de primer grado, se observa que tan sólo el considerando trigésimo primero se refiere, de manera formal y genérica, a dicha alegación pues indica que dicha Convención es *“improcedente por no encontrarse tal situación contemplada en la legislación y teniendo además en cuenta que el delito por el cual han sido condenados los encausados pertenece a la categoría de lesa humanidad (sic)”*;

8º) Que, como se constata, el sentenciador de instrucción, confirmado por el tribunal de alzada, no se hace cargo de dicha alegación sino que tan sólo menciona razones formales para descartar su aplicación, a saber, una injustificada improcedencia y el carácter de lesa humanidad del ilícito de autos, las cuales resultan insuficientes ya que, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue promulgada con fecha 1 de septiembre del año 2017, a través del Decreto N° 162, por tanto ha sido incorporado a la legislación nacional desde esa fecha y, además, debe tomarse en consideración que su aplicación dimana del inciso 2º artículo 5º de la Constitución



Política de la República, de tal manera que dicho cuerpo normativo era aplicable y en nada altera esta conclusión el hecho que se trate de un delito de lesa humanidad pues, ni el aludido instrumento internacional ni algún otro, determina la improcedencia para dicha clase de ilícitos y, en consecuencia, el fallo no cuenta con la debida fundamentación en dicho aspecto y se encuentra incurso del vicio de casación formal contemplado en la causal 9ª del artículo 541 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el numeral 4° del artículo 500 del mismo cuerpo legal, lo cual obliga a declarar de oficio la nulidad del mentado fallo;

9°) Que, con arreglo al artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie de conformidad con lo preceptuado en el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal puede, conociendo por vía de casación, invalidar de oficio la sentencia, cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolece de vicios que dan lugar a la casación en la forma, cuestión que fue posible advertir sólo durante el estado de acuerdo como ya se señaló, por lo que esta Corte, de oficio, al existir un vicio formal conforme se describe en los motivos precedentes, procederá a anular el fallo de segunda instancia, dictando a continuación la sentencia de reemplazo que se ajuste a derecho;

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

I. Que, se **RECHAZA** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado de los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, deducido en contra de la sentencia de



fecha cuatro de enero de dos mil veinticuatro, dictada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

II. Que, habiendo tomado conocimiento esta Corte del fallecimiento del condenado, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, el tribunal de primer grado, una vez realizadas las certificaciones correspondientes, dictará la resolución que en derecho corresponde.

III. Que, por los argumentos enunciados en los fundamentos sexto a noveno, **se invalidará de oficio la referida sentencia**, siendo reemplazada por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se previene que los Ministros señores Valderrama y Llanos, concurren a la decisión de rechazar el recurso de casación en el fondo formulado por la defensa de los sentenciados, ello en virtud de los vicios formales que se anotan en el razonamiento quinto del presente fallo.

En tanto, **los mismos integrantes manifiestan su voto en contra en lo que respecta a la actuación oficiosa del Tribunal** pues estimaron que el vicio de casación de forma no es concurrente ya que, en concepto de los disidentes, en términos generales, la ley procesal sanciona la ausencia total de consideraciones en torno a una alegación, cuestión distinta a una exposición errada de las razones para descartar la misma. En tal sentido, el fallo de instancia cuenta con una motivación cierta sobre la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de tal manera que no existen razones para obrar de oficio en esta oportunidad.

El Ministro señor Valderrama, por su parte, reafirma su posición en esta



materia en torno a la aplicación de la Convención, sosteniendo al respecto lo que sigue:

1º) Que, sobre el particular, conforma un hecho de la causa la avanzada edad de los sentenciados, superando con creces, en todos los casos, los 65 años de edad.

En tal sentido, la edad los coloca como parte de grupos vulnerables en materia penitenciaria y, por tanto, es uno de los elementos que el Estado debe ponderar en el ejercicio del control carcelario que ejecuta y que, por de pronto, es parte de su principal finalidad, cual es *“...atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”* (artículo 1º de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile).

En este sentido, en el ámbito penitenciario, en particular las medidas alternativas a la reclusión por razones humanitarias en el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, responde a una de las materias que presenta un acentuado antagonismo, muchas veces marcado por el legítimo derecho de las víctimas quienes han visto transgredidos sus derechos e identifican, en esta forma de cumplimiento, una nueva afectación de ellos y, derechamente, la asimilan a la impunidad. En tanto, en las antípodas de dicha posición, se encuentra la idea de quienes estiman ello como una respuesta más bien vindicativa y que se aleja, precisamente, del respeto de los derechos humanos, de quienes, en precarias condiciones de salud, están privados de libertad a causa de acciones que responden a un contexto histórico que no es tomado en consideración.



2º) Que, ahora bien, tal discrepancia no cuenta con una solución legislativa tratándose específicamente de personas condenadas pertenecientes al grupo etario ya referido (con excepción de los requisitos especiales para acceder a la libertad condicional –entre otros, de los sentenciados por crímenes contra los derechos humanos- que consagra el artículo 3º bis del Decreto Ley N° 321); pero existen iniciativas en dicho sentido y parece encontrar cierto consenso la idea de establecer especiales requisitos de carácter más general, y no en relación a algún beneficio determinado de cumplimiento de condena, para acceder a dicha modalidad respecto de quienes han sido objeto de privación de libertad por crímenes de lesa humanidad, cuestión que, por lo demás, sigue la línea internacional que trata la materia.

En sí, cobra relevancia la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo texto, el artículo 13, bajo el rótulo: *“Derecho a la libertad personal”*, en su inciso final, establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”*

En este sentido, existe un deber del Estado de propender a estas medidas alternativas que, dicho sea de paso, no están detalladas ni siquiera mencionadas, entregando a los ordenamientos jurídicos internos la determinación de sus aspectos que, como se dijo, no quedan aún claros ni menos precisados en el caso de quienes han sido condenados por ilícitos de esta clase.



Sobre lo mismo, existen diferentes guías internacionales que tratan el asunto, por ejemplo, *Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos* (Reglas Nelson Mandela) o *Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, las cuales concuerdan en la vulnerabilidad en que se hallan los adultos mayores que se encuentran privados de libertad. En similar dirección encontramos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo compendio normativo, complementario de las jurisdicciones penales nacionales, tal como expresa su artículo 1°, también elabora algunas importantes referencias a esta materia. En este punto, cabe recordar que la competencia de dicha Corte es precisamente el conocimiento y juzgamiento de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, estando mencionado, precisamente, los crímenes de lesa humanidad como el que nos convoca. Así, sobre la modificación de la penalidad aplicada, reducción de la condena en todo caso, el artículo 110 del aludido Estatuto plantea la posibilidad de efectuar la referida disminución, entregando como idea inicial que el Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte y, solo oirá esta petición una vez que hayan cumplido dos tercios de su pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena perpetua y, solo cumplido dicha exigencia, revisará otros elementos como (i) que el condenado haya cooperado con la Corte desde el principio y de manera continua en la investigación y el enjuiciamiento; (ii) que haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular, haya cooperado en la localización de bienes para las reparaciones; (iii) otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento



y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias, suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

3°) Que, en este orden de cosas, es claro que el asunto requerido por el apoderado de los sentenciados revela una compleja situación que, en la actualidad, no cuenta con una solución legislativa nacional definida sobre la procedencia, la forma y el cumplimiento de medidas alternativas a la pena para casos relacionados con delitos de lesa humanidad respecto de los condenados de edad avanzada.

4°) Que, conforme a las consideraciones expresadas en el presente fallo, el previniente estuvo por ordenar que, Gendarmería de Chile, evalúe las condiciones carcelarias respecto del recinto en donde han de cumplir la pena impuesta en esta causa, debiendo informar al Juzgado encargado de la ejecución, la factibilidad técnica para albergar personas condenadas de la edad de los sentenciados, de tal manera que, con más y mejores antecedentes, determine una medida alternativa en torno al cumplimiento de la pena impuesta.

El Ministro señor Llanos, por su parte, deja además constancia de lo siguiente, en relación con su disidencia:

I.- En primer lugar, la ausencia de legislación interna sobre el cumplimiento de penas de adultos mayores debe analizarse, en cada caso, bajo la perspectiva de si efectivamente la pena de presidio en un penal constituye un atentado contra la dignidad y, en definitiva, si es necesaria la reclusión domiciliaria para cumplir con los objetivos de atención integral y rehabilitación que exige la Convención Internacional Sobre Derechos de Adultos Mayores; y, en segundo lugar, se debe atender al tipo de delitos respecto por los que fueron condenados los acusados y



las obligaciones que tiene el Estado, en lo que a delitos de lesa humanidad se refiere.

II.- Así, no existen en el presente caso razones que permitan justificar que la pena privativa de libertad de los encausados, por ser mayores de 70 años, constituya *per se* una afrenta a su dignidad, y que impida su atención integral, como quiera que la pena en un recinto cerrado no imposibilita, necesariamente, la concurrencia de condiciones compatibles con la dignidad humana, ni tampoco veda el acceso a medidas de atención integral.

III.- Del mismo modo, es importante tener presente que en este caso no se trata de delitos comunes, sino de delitos de lesa humanidad y, conforme a ello, se debe poner especial atención si la resolución permite o no cumplir con las obligaciones del Estado referidas a la sanción proporcional y efectiva respecto de este tipo de hechos punibles, lo que conlleva una mayor exigencia para verificar las condiciones que lo permiten. Al respecto, ha señalado la Corte IDH, *“el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos [...], pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad”* (<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/185.asp>).

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos; en tanto, la prevención y disidencia por parte de sus autores.

RoI N° 3.743-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa



Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía

Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:41:46

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:41:47

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:41:48

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:51:29

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:41:49



TYTJXZXBZLD

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., Maria Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión precedente y teniendo en consideración, además, lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta el siguiente fallo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando trigésimo primero, el cual se suprime.

Y, TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

1º) Que, conforme se detalla en la contestación de la acusación fiscal, la defensa planteó la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, en su mérito, solicitó que la pena dictada, en caso de ser privativa de libertad, se decrete su cumplimiento en el domicilio de los condenados, justificando ello en la avanzada edad de los sentenciados, 92 años en el caso de Reyes Basaur y, 87 años respecto de Santibáñez Obrequé.

2º) Que, en esta materia, por la edad de los referidos inculcados y por señalarlo así el inciso final del artículo 1º de la Ley 19.828, ellos integran el grupo etario denominado como adultos mayores de la cuarta edad y, en su favor, cobra plena aplicación la aludida Convención pues este instrumento internacional se encuentra incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 5º de la Carta Fundamental y en cuyo texto se establece una obligación insoslayable para el Estado como parte firmante del mismo, en cuanto se compromete a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, sin discriminación de ningún tipo, entendiendo que, en este caso, se trata



del juzgamiento de adultos mayores que encuadran, en plenitud, en lo que entiende la Convención como “persona mayor”, de allí que existe una responsabilidad y un compromiso internacional en torno a su aplicación que no puede rehuirse bajo la premisa que no existe un cuerpo normativo nacional que prevea la situación penitenciaria de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo cual los colocaría en una situación discriminatoria que no es tolerable, sobre todo si el inciso final del artículo 13 de la Convención establece: *“Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”.*

3º) Que, sobre este último aspecto – la falta de regulación –, es pertinente recordar que nuestra Carta Fundamental, lo cual es replicado en el Código Orgánico de Tribunales, establece con claridad que son los tribunales de justicia a los que les corresponde la misión de conocer de los conflictos, juzgarlos y hacer ejecutar lo juzgado, siendo esto último un aspecto que, en doctrina, se le ha denominado como el tercer ámbito del derecho penal o derecho penal ejecutivo que, algunos, lo sitúan más bien en una rama del derecho administrativo, siendo una de las principales tareas del servicio público a cargo de Gendarmería de Chile. En tal sentido, tal como expone el destacado autor nacional, don Carlos Künsenmüller L., *“el derecho penitenciario, que se ocupa de organizar la forma de ejecución de la pena, los métodos y tratamientos aplicables a los reclusos, sus derechos y obligaciones, y las garantías que se les deben otorgar, es, en opinión*



del profesor Enrique Cury, una parte muy importante del Derecho Penal. Michel Foucault ha dicho que el sistema penitenciario es la región más sombría del aparato de justicia. En esto tiene toda la razón, ya que varios de los principios fundamentales, limitativos del ius puniendi, como asimismo, garantías esenciales del procedimiento pena, encuentran su piedra de tope en la fase de la ejecución de las sanciones criminales, normalmente exenta de un control judicial especializado". Asimismo, el mismo autor precisa que "la ejecución penal es la última fase, la etapa final del sistema punitivo, el escenario en el cual se ponen a prueba los segmentos precedentes y el sistema penal se somete al escrutinio público, frente a la comunidad a la que debe brindar protección a través de la ley y la ejecución de las sentencias que, conforme a ella, se dictan" (Künsenmüller L., Carlos. Derecho Penal y Política Criminal. Compilación de artículos. La Judicialización de la Ejecución Penal. Pág. 637. Legal Publising Chile. Año 2012).

4°) Que, de igual forma, tampoco puede obviarse la existencia de otros instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que refrendan esta línea de un trato digno y humano respecto de las personas privadas de libertad, tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto establece en el inciso final del artículo XXV. que: *"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad."* En tanto, el artículo 10 N° 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: *"Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser*



humano.”. Del mismo modo, expresa la Convención American sobre Derechos Humanos, señalando en su artículo 5.2, bajo el rótulo Derecho a la Integridad Personal: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

En un mismo sentido, aun cuando no sea obligatorio pero sí puede conformar una guía de referencia en esta materia, existen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las cuales constituyen *“los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo”* (referencia indicada en el link: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf).

5º) Que, incluso, derivado del artículo 5.2 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, en este plano, cobra suma relevancia la Opinión Consultiva OC-29/22 de 30 de mayo de 2022, la cual fuere emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a los Enfoques diferenciados respecto de determinados Grupos de Personas Privadas de la Libertad (Interpretación y alcance de los artículos 1.1, 4.1, 5, 11.2, 12, 13, 17.1, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros instrumentos que conciernen a la protección de los derechos humanos; siendo de suma relevancia lo expresado por la corte en su párrafo 350: *“Por otra parte, en*



cuanto a personas condenadas por la comisión de delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que, durante la ejecución de penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios, el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. En el análisis de la procedencia de medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de libertad que permitan continuar el cumplimiento de la pena bajo otras condiciones fuera del centro penitenciario, pero que no impliquen la extinción o perdón de la pena, las autoridades competentes deben ponderar además de la situación de salud del condenado, sus condiciones de detención y facilidades para ser atendido adecuadamente (ya sea en el centro penal o mediante traslado a un centro médico), y la afectación que ocasione tal medida a los derechos de las víctimas y sus familiares. En esta línea, resulta necesario que en dicha evaluación se tomen en cuenta y valoren otros factores o criterios tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares)."

6°) Que, a lo dicho, cabe agregar dos disposiciones del Estatuto de Roma, instrumento internacional ratificado por Chile. En primer lugar, el artículo 1°, en el que: *"Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte"). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá*



*carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”. Luego está el artículo 110 del mismo cuerpo normativo, el que se extiende a propósito del *Examen de la reducción de la pena*, señalando:*

“1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.



5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.”

De dichas normas, es posible concluir que existe una real opción de reducción de las penas, en casos especiales, aun en delitos tan graves como los que conforman atentados de lesa humanidad, aspectos que también deben ser sopesados en esta materia.

7º) Que, el citado plano normativo deja en claro que existe un respaldo en el derecho internacional de los derechos humanos, materia de sustitución de condenas en casos excepcionales, incorporado a nuestra legislación, el cual debe ser observado por los actores relacionados con la administración de justicia pues representa un fiel reflejo de la necesidad de emplear un trato digno y humano respecto de quienes se encuentran en una situación de vulneración y riesgo, como son las personas privadas de su libertad que, por cierto, se puede agravar dado que, en algunas situaciones, padecen enfermedades o patologías que no sólo son propias de su rango etario, las cuales, por las condiciones en que pueden encontrarse, se ven desmejoradas, de tal manera que no puede tener cabida ninguna clase de discriminación, ni siquiera la justificación que pudiere plantearse sobre los crímenes atroces que pudieron haber cometido pues, en Chile, nuestra Carta Fundamental garantiza la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República). Es más, el derecho internacional no descarta la posibilidad de entregar beneficios alternativos a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad sino que condiciona el otorgamiento



de los mismos al cumplimiento de ciertas condiciones que, en definitiva, se correlaciona con la garantía de la no impunidad.

8º) Que, de todas formas, en esta ecuación, no puede perderse de vista la problemática que se plantea en estos asuntos, en donde la temática se contrapone con el legítimo derecho de las víctimas a una reparación integral que, muchas veces, lo equiparan al deseo que las penas privativas de libertad impuestas se vean purgadas de manera íntegra, entendiendo que ello equivale, en parte, a una forma de reparación del mal causado por sus perversas acciones, como asimismo, consideran que una medida distinta a la privación de libertad acrecienta un eventual riesgo de fuga, lo cual socava cualquier pretensión de justicia.

Ahora, estos elementos, no son ajenos a la discusión que suscita la materia y que es común en los países latinoamericanos que fueron asolados por un período dictatorial en que se cometieron delitos de lesa humanidad. Incluso, en pronunciamientos emitidos por Tribunales internacionales, como el que recayó en el caso *Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú*, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 145 de su dictamen ha sostenido, en lo pertinente: *“...No obstante, la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad.”*

Incluso, se cuenta con la posición entregada por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, el que en su informe sobre su visita a Chile



(A/HRC/22/45/Add.1, 2013) consideró que: *“todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general”*, sin perjuicio de lo cual deben considerarse determinados elementos indispensables para que accedan a atenuantes o beneficios (párrafo 32).

9º) Que, en este orden de reflexiones, reconociendo como válidos todos los aspectos mencionados, bien deben considerarse en toda decisión que implique la dictación de una sanción criminal y, sobre todo, en la procedencia de una medida alternativa de cumplimiento a una pena de esta clase, a lo cual se deben sumar otros elementos tales como, la edad, la salud y/o las condiciones carcelarias en que se cumple el castigo e, inclusive, el móvil, la naturaleza y la gravedad del delito por el cual ha sido sancionado. Ello, como vemos, no es ajeno en el derecho internacional y como ya fuere indicado a propósito de la Opinión Consultiva OC-29/22 de la Corte Interamericana, son particularidades que deben ser ponderadas. Ello, como explica el destacado autor español don Jesús – María Silva Sánchez, *“cuando el juez se plantea la imposición de una pena de prisión al autor de un injusto culpable, sabe – o debe saber – perfectamente que no impondrá sólo una pena de privación de libertad la libertad ambulatoria. Resulta evidente – e ineludible – la obligación de considerar los efectos colaterales de la ejecución de dicha pena. Algunos de estos efectos secundarios se hallan consustancial (y lícitamente) vinculados a la noción de prisión como «institución total». Pero otros no se encuentran vinculados consustancialmente (ni tampoco lícitamente) a la privación de libertad, sino que son debidos a las deficiencias del Estado”* (Silva Sánchez, Jesús – María. *Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho Penal*. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2018. P. 153).



Así, en este entramado, tal como se advierte del resultado de la medida para mejor resolver decretada en estos autos, la situación del enjuiciado Reyes Basaur destaca por lo avanzado de su edad, pues ya cuenta con 92 años y, en la actualidad, Gendarmería de Chile informa que corresponde a un interno *“con dependencia leve, según EMPAM realizado, siendo un usuario con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante, insuficiencia cardíaca, padeciendo, además, un trastorno neurocognitivo mayor y presentando múltiples caídas en la unidad.* De igual forma, *precisa el listado de siete medicamentos que ingiere como parte de su tratamiento farmacológico que debe consumir cada doce horas y/o a diario, estando en controles de cardiología, estando pendiente hora de urología y traumatología por interconsulta”.* En tanto, en lo que respecta al sentenciado Santibáñez Obreque, la situación también es similar. Se trata de un recluso de 86 años que, actualmente, cuenta con *“antecedentes mórbidos de hipotiroidismo, hiperplasia prostática benigna, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, constipación crónica e hipoacusia bilateral, todo lo cual se encuentra bajo tratamiento farmacológico bajo indicación médica y administrada por la unidad de enfermería de la unidad penal”.*

10°) Que, en este orden de cosas, es posible concluir que, por su situación etaria y sus respectivos estados de salud, esta última remarcada por el plano penitenciario en que cumplirán sus condenas, sin duda produce (replicando en ello del aludido autor español), *“un efecto afflictivo adicional y contrario a Derecho sobre cuya valoración se puede discutir. Desde luego, este daño en absoluto se mueve en la dimensión simbólico – expresiva de la pena. Pero sí lo hace en la dimensión fáctica – afflictiva de ésta.”* (Ibidem, p.154).



En estas condiciones, la pena aplicada a los encartados en un recinto carcelario bajo las circunstancias anotadas, sumado a la gran cantidad de tiempo que les queda por purgar, se traduce en un tratamiento que puede considerarse cruel o lacerante hacia su dignidad, lo cual también está proscrito, tanto en el plano nacional como internacional, ejemplo de ello es lo que establece la letra b), artículo 2 de la Ley N°21.154, en cuanto define el trato o pena cruel, inhumano o degradante como, *todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad*. En este caso, como recuerda la autora ibérica doña Marina Mínguez Rosique, *“la dignidad humana implica reconocer el valor intrínseco de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Precizando esta idea, sostiene VON HIRSCH que aquellos que sufren la pena deben ser tratados como personas, como miembros de la comunidad, razón por la que no puede aplicarse ninguna pena que niegue este estatus o le degrade, tratándolo y haciéndolo sentir como algo inferior. Por ello, la pena debe ser impuesta de manera que quien la soporta mantenga una cierta autonomía y de modo que, pese a que se sufra un castigo que, per se, es desagradable (pues no en vano la pena siempre implica una restricción de derechos), pueda hacerse con dignidad”* (Mínguez Rosique, Marina. Penas crueles e inusuales. El debate sobre los límites constitucionales al castigo en los Estados Unidos. Ed. Atelier Libros Jurídicos. 2020. P. 166 y 167). De un mismo modo, precisa la misma autora hispánica que, *“si el principio de humanidad de las penas exige tratar al condenado como persona, como fin en sí mismo, y éste debe configurarse como su centro, y no únicamente como su mero sujeto pasivo, la pena, entonces, debe, en primer lugar, tener una finalidad para el propio condenado, y no solo tener*



sentido en el marco de los fines que el Estado quiere alcanzar con ella; de otra parte, la pena no puede ser de tal tipo que, debido a su configuración o ejecución, ocasione un deterioro de las capacidades y cualidades del condenado como ser humano (su personalidad, sus habilidades sociales ...). Así, por ejemplo, solo podrá entenderse que la pena privativa de libertad respeta el estándar exigido por el principio de humanidad de las penas si se encuentra orientada hacia la reeducación y la resocialización, pues ello garantizará que el condenado sea honrado como persona.” (Ibidem, p.167 y 168).

11°) Que, bajo las premisas indicadas, esta Corte considera factible la imposición de una medida como la solicitada pues, primero, entiende aplicable el instrumento internacional invocado, al igual que otros ya mencionados pero, no sólo por lo expresado sino que, además, ello encuentra sustento en la propia Carta Fundamental la que permite obrar de esta forma cuando señala en el inciso 1° letra d), numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República: *Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto;* todo lo cual se conjuga con la situación de riesgo en que se encuentran los enjuiciados, no sólo por su edad sino que, por su salud, existe una real amenaza para su vida, con lo cual se recurrirá a una medida alternativa que permite resguardar lo anterior con el control y supervisión de las penas impuestas, considerando que la reclusión domiciliaria total, sumado al monitoreo telemático, resulta un medio idóneo para controlar el cumplimiento cierto de la sanción aplicada.

12°) Que, por las argumentaciones dadas en las motivaciones precedentes, esta Corte disiente del dictamen fiscal emitido, postura que ya ha venido



esbozándose en los pronunciamientos que en casos similares, han hecho lugar a la sustitución de condenas por motivos humanitarios y/o salud (v.gr. Roles Corte Suprema N° 8705-2024, 9256-2024, 20.636.-2024, 30.919-2024, 32.767-2024, 32.864-2024, 38.025-2024, 46.354-2024, 51.650-2024, 55.606-2024, 59.028-2024, 59.029-2024, 59.850-2024, 60.327.2024 y 61.017-2024).

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 514, 527 y 534 del Código de Procedimiento Penal,

I. Que, se **CONFIRMA** la sentencia apelada, dictada con fecha veintidós de mayo de dos mil veintitrés, por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Max Antonio Cancino Cancino, en la causa Rol N° 325-2017 DDV, **CON DECLARACIÓN** que, a los sentenciados Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, para el cumplimiento de la pena impuesta en estos autos, se le concede la modalidad de reclusión domiciliaria total, controlada mediante el monitoreo telemático respectivo.

El tribunal de ejecución dispondrá la realización del informe de factibilidad técnica, debiendo, en caso que el resultado de aquel sea negativo, disponer una medida de control distinta que asegure la supervigilancia de la pena por parte de la autoridad penitenciaria que corresponda.

II. Que, se mantiene la decisión del tribunal de alzada, en orden a aprobar el sobreseimiento definitivo y parcial de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós, de fojas 541, el cual fuere elevado en consulta a dicha instancia.

III. Que, en lo demás, se confirma el fallo apelado.



Decisión adoptada con el voto de los Ministros señor Valderrama y señor Llanos, quienes, replicando las reflexiones indicadas en su disidencia plasmada en la sentencia de casación, estuvieron por confirmar el fallo en alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos, en tanto la disidencia por sus autores.

Rol N°3.743-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Manuel A. Valderrama R., Sr. Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavolari G. Santiago, 27 de junio de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:41:50

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 27/06/2025 16:41:51

MARIA TERESA DE JESUS LETELIER
RAMIREZ
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:41:52

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 27/06/2025 16:51:31



PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 27/06/2025 16:41:52



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

